



Reinventando la movilización laboral en el capitalismo agroindustrial contemporáneo: el caso de los corteros de caña del Valle del Cauca

Jhoan Felipe López Castillo

**Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Sociología
Bogotá, Colombia
2018**

Reinventando la movilización laboral en el capitalismo agroindustrial contemporáneo: el caso de los corteros de caña del Valle del Cauca

Jhoan Felipe López Castillo

Trabajo de investigación presentado como requisito parcial para optar al título de:

Magister en Sociología

Director:

Fabio Alejandro Camargo Alvarado Ph.D.

Codirectora:

Nubia Yaneth Ruiz Ruiz Ph.D

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Sociología

Bogotá, Colombia

2018

*“...El viento cenizas lleva
De la quema de la zafra
Y todo el valle lo sabe
Que están quemando la caña, con sabor.
Con orgullo y dignidad
Metiendo el pecho a la zafra
Fuego a la caña
Machete al cinto
Se alimenta una familia completa
Fuego a la caña”.*

Están quemando la caña. Yuri Buenaventura.

Agradecimientos

A la abuela Olga y el abuelo Eduardo que sembraron en mí desde la infancia una semilla de curiosidad. La memoria emotiva me lleva a recordar sus historias de la Concha, de la yegua Gallarda, de arrieros, de café, de violencias, de vida en la fábrica, de la muerte de Gaitán, y la sociología me llevó a la reconstrucción de dichos relatos.

A mi madre y a mi padre por haberme abierto la ventana de los fantásticos paisajes en carreteras cañeras que conectan el Quindío, el Valle del Cauca y el Cauca. Aún recuerdo el olor y la ceniza de la caña quemada deslizándose en el contorno de la atmósfera.

A los campesinos corteros de caña que siempre acompañaron aquellos recorridos y que hoy hicieron parte de este relato. A sus luchas, a su valentía y a su ejemplo de entereza y dignidad.

A Estefanía, compañera de hazañas y motivadora de proezas quien alentó desde siempre, con amor y paciencia, este proceso humano y académico. Agradezco especialmente por sus valiosos aportes al texto.

A mi tutor y director Alejandro Camargo por su rigurosidad, dedicación, paciencia y compromiso desinteresado con este trabajo. Cada comentario recibido ha sido certero y ha sido fuente de grandes enseñanzas. También, al profesor Urrea por sus valiosos aportes.

A las amigas y amigos de la clase, a sus locuras, a sus historias, sus sonrisas, sus luchas y sus vidas. Gracias por cada café compartido.

A todas y todos quienes luego de leer este trabajo dediquen un tiempo para la retro alimentación.

Contenido

Resumen.....	9
Palabras clave.....	9
1. Introducción	10
2. Marco teórico	17
2.1 Sobre las relaciones laborales	18
2.2 Sobre el sistema agroindustrial.....	21
2.3 Sobre la movilización social	26
3. Estado del arte.....	29
4. Historias de machete al cinto	39
5. "Las contradicciones no se zanjaron, pero si se acaba la empresa se acaba el trabajo" ...	51
6. La interconexión entre los ajustes en materia laboral y la movilización de corteros de caña en el escenario de la agroindustria azucarera	62
7. Conclusiones	69
8. Referencias.....	76

Resumen

Las recientes transformaciones del capitalismo agroindustrial mundial han generado nuevas condiciones en que los actores interactúan en contextos rurales. Si bien persisten las viejas condiciones de explotación, extracción de materias primas y de precarización laboral, asistimos a una reestructuración productiva del sistema agrario que se transforma en sistema agroindustrial, transformando no solo su base productiva sino las relaciones laborales que en ella se producen, el entorno legal que las regula/desregula y sobre todo transforma los repertorios de acción colectiva de los habitantes locales, configurando conflictos de tipo polivalente. Por esta razón, este trabajo analiza la transformación de las prácticas y discursos en la movilización laboral de corteros de caña en el escenario de la reestructuración productiva del sistema agroindustrial azucarero del Valle del Cauca posterior al año 2008. Este fenómeno se inscribe en el contexto de la consolidación del sistema agroindustrial capitalista mundial el cual busca fuentes de energía renovables - como el etanol - para la reproducción del sistema capitalista, transformando las condiciones en que los actores locales se relacionan. Por esto el trabajo responde a la necesidad de entender concretamente las complejas relaciones laborales existentes en un enclave agroindustrial específico y busca superar las explicaciones dicotómicas clásicas. La investigación encontró que dichas relaciones laborales entre actores cada vez más complejos, se inscriben en un escenario de reestructuración productiva el cual determina las condiciones en que los trabajadores rurales se movilizan.

Palabras clave: *Sistema agroindustrial, reestructuración productiva, relaciones laborales, movilización social, conflicto polivalente, corteros de caña, Valle del Cauca.*

1. Introducción

El presente trabajo analiza la transformación de las prácticas y discursos de movilización laboral, desarrolladas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO), posterior al año 2008, como respuesta a las reestructuraciones capitalistas - recientes- que han generado nuevas condiciones al interior de la agroindustria de la caña de azúcar del Valle del Cauca.

El departamento del Valle del Cauca está ubicado en el suroccidente colombiano y hace parte del denominado valle geográfico de río Cauca que representa la sección del país en donde se afincó la industria de la caña de azúcar desde finales del siglo XIX, agrupando 47 municipios desde el norte del Cauca hasta el sur de Risaralda. En esta sección del país, hoy existen 225.560 hectáreas sembradas en caña para azúcar y cinco ingenios productores de etanol: Incauca -en el departamento del Cauca-Manuelita, Providencia y Mayagüez -en el departamento del Valle del Cauca- y el ingenio Risaralda -en el departamento de Risaralda. Adicionalmente, el sector azucarero -según la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar (ASOCAÑA)- genera más de 188.000 empleos directos e indirectos y cerca de 1.000.000 personas dependen de esta actividad. Históricamente un sector de los trabajadores rurales asociados a estos ingenios, han protagonizado movilizaciones consolidando fuertes confrontaciones con los dueños de los ingenios a quienes les han exigido mejoras en las condiciones laborales, ante la progresiva precarización bajo la cual trabajan en esta industria.

Antes del 2008 los corteros de caña se movilizaban contra la implementación del sistema de contratistas, diseñado por la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar (ASOCAÑA), exigiendo mejores salarios, mejoras en el sistema de salud, vivienda y en férrea oposición a los

empresarios -dueños de los ingenios- que promovían el sistema de contratistas. Así pues, en 1970 los corteros de caña de los departamentos del Valle del Cauca y del Cauca, realizaron una huelga en contra de las precarias condiciones laborales a las que eran sometidos, relacionadas con largas jornadas laborales, bajos salarios, subcontratación, violación a los derechos laborales y condiciones adversas para la sindicalización del gremio de corteros de caña. Por esta razón, la precarización tiene su génesis en la intermediación laboral, la cual generó las condiciones para el desarrollo de la agroindustria azucarera actual caracterizada, también, por las limitadas condiciones laborales en el gremio de corteros de caña.

En el año 2008 corteros de caña realizaron una huelga durante cincuenta y seis (56) días en nueve (9) ingenios azucareros del Valle del Cauca y del Cauca, como respuesta a las precarias condiciones laborales a las que estaban sometidos en el marco de la implementación de las Cooperativas de Trabajo Asociado (en adelante CTA). Los corteros exigían la formalización laboral, el derecho a la negociación colectiva y el reconocimiento sindical, es decir, una reforma a la fórmula de las CTA. Adicionalmente, la huelga se dio en el marco de la inauguración de las plantas de etanol en el Valle del Cauca, circunstancia que guarda relación estrecha tanto con la reestructuración capitalista -reciente- en la agroindustria de azúcar, como con el nuevo giro que tomó dicha movilización.

Posterior al 2008 los trabajadores se han movilizadopor la formalización laboral de los oficios no misionales -como lo son los servicios generales-, contra la eliminación de impuestos para la importación de azúcar y etanol y contra la firma de los Tratados de Libre Comercio; estableciendo así, eventualmente, alianzas con los empresarios nacionales de la agroindustria para rechazar conjuntamente los pactos corporativos relacionados con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (en adelante OCDE) y las bancas multilaterales que afectan la economía

del país. Esto se traduce en apoyos útiles y eventuales a los ingenios azucareros, contra quienes anteriormente se movilizaban, esgrimiendo así el argumento de defensa de la industria nacional.

Así pues, para entender la transformación de las prácticas, discursos y resistencias laborales de SINTRAINAGRO posteriores al 2008, se debe entender el desarrollo de la precarización laboral en la agroindustria azucarera, a partir de tres escenarios importantes. Primero, la implementación del sistema de contratistas en la década de 1950, del sistema de Empresa Asociativas de Trabajo (en adelante EAT) en la década de 1990, de las CTA en la década del 2000 y de las Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS) en la actualidad. Segundo, la incursión de la producción de energías renovables -como el etanol- en los ingenios vallecaucanos. Y tercero, la firma del Acuerdo de Promoción Comercial (en adelante APC) entre Colombia y Estados Unidos o Tratado de Libre Comercio (en adelante TLC), sancionado el 21 de octubre de 2011 por el presidente de los Estado Unidos -para la época- Barack Obama.

De acuerdo con lo anterior, posterior a la huelga de 2008 se presentó una transformación de las prácticas, discursos y estrategias de resistencia del gremio de corteros de caña, expresadas en el tipo de alianzas establecidas con los empresarios vinculados a ASOCAÑA, otrora, principales destinatarios de las antiguas exigencias y convertidos hoy en aliados circunstanciales. Estos conflictos ocurren en un contexto de transformaciones capitalistas agrarias a escala global caracterizadas por el auge del agro combustible y los Tratados de Libre Comercio. Es decir, se configura de esta manera un conflicto polivalente que es objeto de análisis de este trabajo. Conflicto polivalente quiere decir que las acciones colectivas de los corteros de caña se deciden en el marco de una estructura de oportunidades, que les asignan a sus marcos de acción colectiva

un carácter cambiante, mutable y no estático. Es polivalente en la medida que se manifiesta de múltiples maneras.

De esta forma, en el nuevo contexto del capitalismo agroindustrial contemporáneo confluyen, para este caso, tres fenómenos de interés sociológico: la incidencia de las transformaciones agroindustriales globales en contextos locales, la movilización social de trabajadores rurales bajo nuevas condiciones y los ajustes estructurales en materia laboral diseñados en Estados Unidos e implementados en Colombia que terminaron dinamizando la reestructuración productiva. Es así como la política de eliminación de los mecanismos de protección, como el Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar (en adelante FEPA) y el Sistema Andino de la Franja de Precios (en adelante SAFP) han debilitado la producción nacional y han generado -consecuencialmente- alianzas entre el gremio de los trabajadores y de los empleadores. Referente a los ajustes estructurales, en materia laboral, mediante la ley 1429 de 2010 (ley de formalización y primer empleo) y el Decreto 2025 de 2011, se establecen instrumentos de formalización laboral, producto de las exigencias del partido demócrata de los Estados Unidos al gobierno colombiano (Urrea, 2007).

Lo anterior, está asociado a los nuevos pactos corporativos para la mundialización de la economía del azúcar y del etanol, impulsados por la OCDE, que ha profundizado las precarias condiciones de competitividad del empresariado nacional, debido a la ya mencionada eliminación de mecanismos de protección como el FEPA y el SAFP.

Por consiguiente, este trabajo tiene como objetivo general, analizar la transformación de las prácticas y discursos de movilización laboral, protagonizadas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO) posterior al año 2008, producto de dichas reestructuraciones capitalistas recientes. Este objetivo general se desarrollará a través de

tres objetivos específicos. Primero, explicar el contexto histórico que llevó a la movilización del año 2008 y su relación con las modalidades de explotación del sistema agroindustrial. Segundo, identificar los nuevos discursos y estrategias de movilización de los corteros de caña afiliados a SINTRAINAGRO¹. Y finalmente, analizar los cambios en la legislación laboral en Colombia y su relación con la movilización de corteros de caña en el Valle del Cauca y con los ajustes estructurales del sistema agroindustrial azucarero.

A manera de hipótesis es importante mencionar que, por un lado, si bien la movilización de corteros de caña -desde 2008- implicó nuevos discursos y nuevas alianzas, los conflictos que pretendió resolver esa movilización están anclados a viejas prácticas de explotación, desigualdad, precariedad y despojo en el capitalismo agrario. Igualmente, esta nueva etapa de movilización ha implicado una reconfiguración de las viejas relaciones entre corteros y empresarios y una ampliación del repertorio de actores involucrados en la reproducción de la precarización laboral de los corteros.

Además, se considera que la movilización de corteros de caña expone un conflicto local como co relato de un fenómeno global, asociado a las configuraciones socio técnicas resultantes de la reestructuración del capitalismo agroindustrial mundial. Dicho de otra manera, no podemos entender completamente la transformación de discursos, prácticas y estrategias de movilización de los corteros de caña, sin considerar la forma como el mercado mundial de agrocombustibles reestructuró las relaciones sociales, económicas y políticas en el contexto de la producción de caña de azúcar en el Valle del Cauca.

¹ SINTRAINAGRO, es una organización sindical que cuenta con 38.000 afiliados a nivel nacional entre los sectores de banano, palma, flores, caucho y azúcar. Son 5.800 afiliados aproximadamente provenientes del sector del azúcar en el Valle del Cauca.

Y, por último, la reestructuración productiva del sistema agroindustrial azucarero afectó no solo las relaciones laborales, sino que además incidió en el ordenamiento legal nacional en materia laboral. Ello significa que, en el caso de la agroindustria vallecaucana, con la apertura del mercado global de etanol, lejos de significar la vieja tesis de la mano invisible del mercado que regula, el Estado se vio en la obligación de legislar normas del derecho laboral para poder implementar las fórmulas que propiciaran los pactos corporativos y el TLC.

El propósito de este trabajo es contribuir a entender este complejo conflicto histórico, desde una perspectiva sociológica, que permita entender la transformación de los conflictos y las relaciones laborales rurales en un contexto más amplio de cambios en la economía política global. También, coadyuvar a la identificación de mecanismos efectivos de resolución de conflictos, priorizando las agendas de movilización y la identidad de los actores locales y el respeto por sus redes y su entorno social, cultural, ambiental y económico. Especialmente contribuir a la identificación de mecanismos que se puedan poner en marcha en el contexto actual de implementación de los acuerdos de paz, en materia de organización del territorio, de la movilización social, del papel y límites de la agroindustria y del énfasis en las políticas laborales. En conclusión, “es pertinente reforzar a los habitantes y sus recursos, al interior de los bioespacios, como táctica para la supervivencia colectiva” (Borda, 2000, p. 22), antes que priorizar agendas multilaterales que impactan profundamente las dinámicas locales.

Este trabajo se enmarca teóricamente en tres discusiones de pertinencia sociológica. Primero, las relaciones laborales de tipo precarias que se configuran en el escenario de la reestructuración productiva, que guardan una estrecha relación con las transformaciones en los discursos y estrategias de movilización laboral en los ingenios azucareros. En este eje teórico cobran relevancia los aportes de Standing (2013), Machado (2002), Enrique de la Garza (2000, 2001),

Urrea (2007) y Orlando Fals Borda (2000). El segundo tipo de discusiones y estudios agrarios colombianos aparece inicialmente en la obra de Antonio García en la década de 1970 y es retomado por Absalón Machado finalizando el siglo XX, y a nivel internacional se complementa con el trabajo de autores como Standing (2013), Houtart (2014), McMichael (2009), White y Dasgupta (2010), Giménez y Shattuck (2009), Arias (2017) y Sánchez (2016). Y el tercero, se refiere a las discusiones respecto de la teoría de movilización de recursos y oportunidad política de Tarow en la década de 1970, haciendo especial énfasis en la relación entre la movilización social y la agroindustria mediante los aportes de Enrique de la Garza (2000, 2001), Mauricio Archila (2001) y Giarraca (2002).

La investigación que soporta este trabajo se llevó a cabo durante 2016 y 2017, utilizando técnicas cualitativas de investigación. Se realizó un análisis documental, a partir de la revisión de bibliografía pertinente, de acuerdo con las tres categorías de análisis del presente trabajo -movilización social, capitalismo agroindustrial y relaciones laborales-. Igualmente se realizó una revisión de documentos como comunicados de prensa, derechos de petición, convenciones colectivas, cartas y querellas proporcionados por SINTRAINAGRO, documentos que fueron proporcionados por SINTRAINGRO. Se examinó el documento Conpes 3510 de 2008 el cual regula, en particular, la agroindustria de la caña de azúcar en el departamento del Valle de Cauca, y en general, la producción de “biocombustibles” en Colombia. Finalmente, se analizaron noticias publicadas en el portal web de SINTRAINAGRO, Dignidad Agropecuaria, Tribuna Roja, Polo Democrático, ASOCAÑA y PROCAÑA, sumado a la revisión de prensa publicada en portal web de El tiempo, El País, Espectador y RCN Radio.

Igualmente, se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas a líderes del sindicato, realizadas en la sede de SINTRAINAGRO en la ciudad de Santiago de Cali, como también en la subsele del

municipio de Sevilla en el Valle del Cauca. Además, se realizaron entrevistas en la ciudad de Popayán, a líderes sociales de dignidad agropecuaria y en Bogotá a académicos -que han estado vinculados al estudio de este fenómeno- miembros del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (en adelante ILSA).

Este trabajo se divide en tres secciones. En la primera sección se explican los antecedentes de la movilización de los corteros de caña, respecto a las formas de precarización laboral. En la segunda sección, se identifican los nuevos discursos y estrategias de movilización de los corteros de caña afiliados a SINTRAINAGRO, explicando la noción de conflicto polivalente, a partir de dos escenarios en que éste se expresa. Y en la tercera sección, se exponen los cambios en la legislación laboral de Colombia -posterior al año 2008- y su relación con la movilización de corteros de caña en el Valle del Cauca. Finalmente, se presentarán las conclusiones sobre la transformación de las prácticas, discursos y resistencias laborales protagonizadas por el gremio de corteros de caña -posterior al año 2008- producto de las relaciones que generan las condiciones actuales del capitalismo agroindustrial contemporáneo, en el contexto de la agroindustria de la caña de azúcar del Valle del Cauca.

2. Marco teórico

En esta sección se explicarán los referentes teóricos de este trabajo, los cuales giran en torno a tres campos de discusión académica: los estudios sobre relaciones laborales, el análisis del sistema agroindustrial contemporáneo y los estudios sobre movimientos sociales.

2.1 Sobre las relaciones laborales

En la nueva estructura agroindustrial, no solamente la tierra, sino que la mano de obra, hacen parte del mercado (Machado, 2002), de ahí la conexión entre relaciones laborales y sistema agroindustrial. En consecuencia, la literatura que plantea Enrique de la Garza (2000), específicamente los conceptos de trabajo, precarización, flexibilización laboral y reestructuración productiva constituyen un eje fundamental para el presente trabajo. Para este autor, en las ciencias sociales existen cuatro momentos que explican las transformaciones del concepto del trabajo en la sociedad moderna: de la revolución industrial a la segunda mitad del siglo XIX, de finales del siglo XIX a la crisis del 29, de la crisis del 29 a los años 60, y desde el año 1970 (neoliberalismo) a la fecha.

Este último momento, produjo la reanimación de contiendas obrero-patronales debido a que la conflictividad irrumpió en lugares inesperados, como, por ejemplo, el conflicto obrero-patronal que ha caracterizado a la agroindustria azucarera del valle del Cauca desde el 2008, cuando la movilización laboral adquirió nuevos matices.

Es así como el conflicto entre corteros de caña y empresarios azucareros coincide con lo descrito por este autor cuando expone que el mercado se convierte en el gran determinador del trabajo (De la Garza, 2000). Por lo cual, surge el concepto de flexibilización para entender los siguientes fenómenos: entrada y salida de los trabajadores de la empresa, salario en función del desempeño en contraste con el salario en función de un horario laboral, contratación colectiva, formas de resolución de disputas refiriéndose a la eliminación de la garantía de sindicalización, seguridad social, leyes laborales y pactos corporativos (De la Garza, 2000). Así que, las EAT y las CTA han hecho parte de la transformación productiva, puesto que, se han perdido las garantías y

la seguridad laboral, lo que generó, relaciones laborales precarias. Es así como la flexibilidad del trabajo ha sido positiva sólo para unos pocos, debido a que para la mayoría se ha traducido en pérdida de seguridad laboral, en incertidumbre, en reducción de salarios y prestaciones laborales, y en mínimas garantías de defensa de los derechos de los trabajadores (De la Garza, 2000).

Según De la Garza (1996), el concepto de reestructuración productiva es entendido como la transformación de la base socio técnica y de los procesos productivos, tanto en los niveles tecnológico, organizacional, de relaciones laborales, de perfil y cultura de trabajo. Lo anterior significa, que con el desarrollo del neoliberalismo se produjo una reestructuración capitalista que generó dos grandes cambios en el mundo del trabajo, por un lado, la inclusión de nuevas tecnologías, nuevas formas de organización del trabajo, la flexibilidad interna y cambio de calificaciones en el trabajo formal. Por el otro lado la precarización de buena parte del mercado de trabajo, el empleo informal, el tiempo parcial y la subcontratación. Es así como la reestructuración productiva incide en la tecnología, la organización y gestión, las relaciones laborales, el perfil de la fuerza de trabajo y la cultura laboral.

La reestructuración de la empresa se refiere a toda una serie de procesos en los que se buscaba, en términos operacionales y de organización del trabajo, un aumento de la rentabilidad y la eficiencia de las actividades de la empresa. Esta reestructuración se apoya en gran medida en un proceso paulatino de tercerización, que permite reducir la carga prestacional y los costos laborales en el campo y la fábrica, pero en una primera etapa la reducción más importante se operó en las labores del campo. (Urrea, 2007, p.149)

En este sentido resulta importante clarificar lo que significa el fenómeno de la precarización y la flexibilización laboral. Standing (2013) ofrece un panorama importante en su trabajo “El precariado”², sus contribuciones permiten analizar, en el caso de los corteros de caña, el proceso

² El precariado es definido por Standing (2013) como una clase en ascenso en Europa desde la década de 1970 la cual ha estado ligada a la flexibilización y a la precarización laboral propia del neoliberalismo.

de precarización en las relaciones laborales de este sector, a partir de las políticas neoliberales de las empresas y los gobiernos, al reducir los subsidios a los trabajadores, y al eliminar la relación laboral de los contratos de trabajo, afectando así sus garantías, y dejándolos completamente desprotegidos. En consecuencia, se les obliga a engrosar las listas de desplazados y de desempleados, que migran a otras geografías del país³.

Standing (2013), propone un contexto que explica el surgimiento de esta nueva clase. La aplicación de las fórmulas neoliberales por parte de los gobiernos en Europa a partir de 1980, debían promover la flexibilidad laboral ya que “A menos que el mercado laboral se hiciera más flexible los costes del trabajo aumentarían y las empresas trasladarían su inversión a los lugares donde los costes fueran más bajos; el capital financiero se invertiría más que en casa” (p.24). Por tanto, la flexibilidad debía manifestarse en las siguientes dimensiones:

La salarial, significaba acelerar los ajustes a los cambios en la demanda -en particular hacia abajo-; la del empleo, significaba la capacidad fácil y sin coste para las empresas de cambiar su nivel -en particular hacia abajo, lo que significaba una reducción en la seguridad y protección del empleo; la flexibilidad en las tareas y puestos de trabajo significaba capacidad para desplazar a los empleados a distintos lugares de la empresa y para cambiar las estructuras de empleo con mínima oposición o coste; la flexibilidad en la pericia significaba capacidad para ajustar fácilmente las habilidades de los trabajadores. (Standing, 2013, p.24)

Fueron siete las condiciones que pretendieron imponer los partidos socialdemócratas europeos y los sindicatos, posterior a la segunda guerra mundial, en la “ciudadanía industrial” o en la clase obrera de antaño. A saber: Seguridad del mercado laboral, seguridad en el empleo, en el puesto de trabajo, en el trabajo, en la reproducción de las habilidades, en los ingresos y en la representación.

³ Este fenómeno se puede ver representado en: Forero, J. Pérez, P. Bustamante, D. (productores) y Acevedo, C. (Director). (2015). *La tierra y la sombra* (cinta cinematográfica), Colombia. Proimágenes.

(Standing, 2013). Si uno de ellos no se cumplía se iniciaba, entonces, la transición a la precarización.

En Colombia dicha transición se ha manifestado con contundencia en las dos últimas décadas. Así pues, el clásico contrato de trabajo amparado por el Código Sustantivo del Trabajo cedió paso a las relaciones de trabajo de tipo civil o comercial, a la figura de prestación de servicios a través de CTA, y a la utilización de la intermediación laboral o de mecanismos de triangulación en las formas de contratación en las que el beneficiario del trabajo no asume directamente las obligaciones respecto a las prestaciones, a la seguridad social y a los riesgos profesionales del trabajador (Procuraduría, 2017). Esta reestructuración va profundamente ligada a las transformaciones propias del sistema agroindustrial las cuales se profundizan a continuación.

Así las cosas, dicha reestructuración de las relaciones laborales o en palabras de Vallejo (2016) la reorganización del trabajo no solamente cambió la legislación laboral sino también otras modalidades de trabajo y contratación que eliminaron el empleo, como son la independiente y la asociativa (p.33).

2.2 Sobre el sistema agroindustrial

Machado (2002), retomando las tesis de la obra de Antonio García (1970), quien dio los pasos iniciales para explicar las estructuras que estaban surgiendo en el proceso de transnacionalización y de modificaciones en la dinámica del mercado mundial, a partir de la década de 1970, planteó el concepto y el proceso que dio como resultado el sistema agroindustrial. Esta transformación de las estructuras agrarias al nuevo sistema tuvo que ver con: el desplazamiento de núcleos de poder desde el sector rural hacia la economía urbano-industrial, la reducción del poder a manos de los

terratenientes, el ascenso del poder industrial-financiero, el fortalecimiento de las transnacionales y de los mercados internacionales, así como la expansión de los mercados regionales.

La penetración de las transnacionales había modificado sustancialmente las formas de funcionamiento de la estructura agraria y había alterado el esquema vigente de la división nacional del trabajo entre la agricultura y la industria manufacturera, y entre la agricultura transnacionalizada y la agricultura productora de alimentos primarios para el mercado interno. (Machado, 2002, p.65).

Así pues, más que un cambio radical en la conformación de un nuevo modelo, lo que se expresó fue una continua adecuación de la estructura productiva, “de las relaciones sociales y de las formas de acción política del Estado” (Machado, 2002, p.63). Transformándose en cambios, en los mercados y en la consolidación de una fase de transnacionalización y del redespliegue agrícola e industrial y “en la implantación de una nueva división internacional del trabajo” (Machado, 2002, p. 64). En este contexto la tierra y la mano de obra forman parte de la economía de mercado, generando nuevas formas de concentración y poder (Machado, 2002). Interesa especialmente, en este trabajo, la mano de obra que se inserta en el mercado y el efecto que ello produce.

Dicha adecuación de la estructura productiva consolidó el sistema capitalista agroindustrial reciente, reordenando su estructura productiva sin abandonar las viejas prácticas extractivas, las cuales transformó. La literatura sobre capitalismo agroindustrial contemporáneo desarrollado por autores como Houtart (2014), McMichael (2009), White y Dasgupta (2010), Giménez y Shattuck (2009), Arias (2017), pone de relieve los apuros del capitalismo en los años 2006 y 2007 en donde se produjo una fuerte crisis financiera y alimentaria mundial, generando la necesidad urgente de estrategias de reordenamiento del capitalismo. Dicha crisis financiera y crisis de alimentos mundial, que lejos de significar la inexistencia de alimentos consistió en el acaparamiento de estos en manos de grandes corporaciones para la producción de nuevas fuentes renovables de energía, produjo medidas relacionadas con la extracción de energías sustitutas a las fósiles -el etanol y el

biodiesel-, como forma de reproducir y de mantener firme el sistema capitalista agroindustrial. Es así, como los pactos corporativos transnacionales que el capitalismo desarrolló y los cambios en los marcos regulatorios de los Estados, fueron otras de las estrategias para sostener el sistema en plenos tiempos de crisis.

En consecuencia, la transición hacia la extracción de nuevos recursos naturales “renovables” como los llamados “biocombustibles” -producidos en países como Colombia, India, Indonesia, Brasil, entre otros- ha creado nuevas condiciones económicas, políticas y culturales en las tecno regiones (Borda, 2007), donde se desarrolla dicha extracción de materias primas. Evidentes situaciones de precariedad laboral, que se presentan en el escenario de la agroindustria azucarera del valle del Cauca, son la consecuencia palpable de las mal llamadas “energías renovables”. De ahí que, la acumulación por despojo y el acaparamiento de tierras para la producción de monocultivos de alimentos (Baquero, 2014), ha degradado social, cultural, política, económica y ambientalmente a los países del sur global (Houtart, 2014).

Así pues, el proyecto de los agrocombustibles es una respuesta a la crisis del capitalismo, pero, aun así, sigue representando la típica acumulación capitalista bajo nuevos métodos: la producción de energías “limpias”, los pactos corporativos (McMichael, 2009), y el acaparamiento de tierras (White y Dasgupta, 2010) para la producción de flex crops⁴ (Baquero, 2014). Bajo esta perspectiva, el interés por la agro energía no ha caído del cielo, sino que evidentemente “se inscribe en un largo proceso de explotación de la naturaleza, sin gran preocupación por su reproducción, ligado a un desprecio de las clases sociales, al trabajo y a los pueblos de la periferia” (Houtart, 2014, p.14). En consecuencia, el etanol -producido a partir de la caña- y el biodiesel -producido a

⁴ Los flex crops, según Baquero (2014), son cultivos como la caña de azúcar, palma de aceite, soja y maíz que tienen múltiples usos: producción de alimentos para humanos y para animales, biocombustibles y materiales industriales.

partir de la palma africana- han desempeñado un papel central en el proceso de la reproducción del sistema capitalista agroindustrial global, debido a que, como fuente de energía, es fuente de transporte y de “desarrollo” (Houtart, 2014, p.14). Sumado a ello ha creado una nueva ola de acumulación de tierras en el mundo, utilizando métodos y discursos como el de seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible basado en energías verdes que ayuden a superar la crisis alimentaria, financiera y ambiental del capitalismo (Baquero, 2014).

Por ello, la transición del capitalismo agrario al capitalismo agroindustrial contemporáneo es impulsado por grandes corporaciones a nivel mundial y apropiado por los Estados mediante pactos corporativos o TLCs, facilitando las condiciones para la extracción de dichas materias primas: Acaparamiento de tierras, mano de obra barata y relaciones laborales basadas en la precarización y flexibilización, entre otras. Lo anterior ha producido graves efectos, como la destrucción no solamente del medio ambiente, sino de las dinámicas sociales locales. De ahí, las demandas históricas de los corteros de caña en el Valle del Cauca, exigiendo cambios en las relaciones laborales basadas en la precariedad, explotación y flexibilización.

McMichael (2009), plantea el concepto de proyecto de agrocombustibles, en el actual contexto del capitalismo agroindustrial, para exponer que, bajo la apariencia de políticas orientadas a la superación de la crisis energética del capitalismo en el mundo, se han abierto nuevas brechas sociales en el marco de los nexos entre corporaciones/estados a partir del agro negocio, lo cual se puede ver en el caso del Valle del Cauca. Es decir, y reproduciendo a Machado (2000), producto de las políticas neoliberales en materia agraria e industrial, se debe reubicar a la población que no es viable económicamente en el mercado en el marco de la apertura comercial como lo son los corteros de caña, dado que son generadores de altos costos laborales pagados por los empresarios por lo que la carga prestacional debe ser trasladada a los trabajadores de los ingenios. Así pues, las

condiciones laborales de los corteros se cubren bajo el manto de la precarización laboral, por ello pensar que las políticas de apertura son beneficiosas *per se*, es ingenuo (Machado, 2000).

Por lo anterior, el capitalismo agroindustrial contemporáneo y el neoextractivismo son conceptos que no se pueden abordar de manera independiente. El neoextractivismo en América Latina, y según Arias (2017), ha consistido en que los Estados coadyuven a legitimar los intereses de los agentes hegemónicos del sector extractivo: Empresas y gobiernos -especialmente Estados Unidos y Canadá- y corporaciones multilaterales. En el caso de la caña -fuente de energía renovable- son beneficiados aquellos actores que viven de la renta extractiva privatizando los medios de producción y las empresas del Estado. Sumado a la (re)primarización de las economías nacionales, las reformas de los marcos regulatorios en materia laboral y la flexibilización de los controles ambientales y sociales, “todo para que la inversión extranjera acceda a fuerzas de trabajo y recursos estratégicos baratos”. (Arias, 2017, p.24).

En palabras de Sánchez (2016), las nuevas condiciones de precarización en el mercado laboral y en las condiciones de producción, niegan la posibilidad de subsistencia de las economías locales, las cuales son absorbidas gracias a la restructuración del capitalismo agroindustrial contemporáneo mediante los dispositivos implementados por el neoextractivismo, es decir que:

El neoextractivismo amplía la canasta energética y minera y aplica nuevas tecnologías productivas y de comercialización, articulado a nuevas formas organizativas. Asimismo, remoja las relaciones con los poderes públicos volviéndolos funcionales a las realidades y políticas neoliberales. De la colonia esclava a la República con neoesclavismo disfrazado de proletarización. (Sánchez, 2016, p.16).

No obstante, este contexto ha causado un resurgimiento de nuevos movimientos sociales alrededor de la lucha contra la precarización de las condiciones de trabajo, la defensa del territorio, de la soberanía alimentaria y del medio ambiente (De la Garza, 2000). Así que, el resurgimiento

de las luchas sindicales de los corteros de caña -del Valle del Cauca- posterior al 2008, que se ha centrado en combatir la precarización laboral, ha sido producto de las nuevas condiciones de reestructuración y la articulación de este sistema internacional con reformas a nivel nacional, es decir, producto de las nuevas condiciones del sistema capitalista agroindustrial (De la Garza, 2000). De ahí la importancia de profundizar en el eje teórico de movilización social.

2.3 Sobre la movilización social

El tercer eje teórico que sustenta este trabajo es el de la movilización social, el cual guarda una estrecha relación con la protesta social. Desde la perspectiva de Mauricio Archila (2001), respecto a cómo se ha leído la protesta social en Colombia, es importante resaltar que los nuevos movimientos sociales, posteriores a la década de 1980, han planteado una relación distinta con el Estado, generándose ocasionalmente relaciones complementarias que aplican a los corteros de caña, “lo que no quiere decir que se suprima el conflicto” (Archila, 2001, p.32). Mientras que, Enrique de la Garza (2000), plantea que desde 1970 hasta hoy, ha irrumpido nuevamente una conflictividad obrero-patronal en lugares en donde ésta había desaparecido. Cuestiones que se evidenciarán y que serán tratadas a lo largo de este documento, con relación a los corteros de caña en el Valle del Cauca.

El fenómeno estudiado en el presente trabajo está asociado a la teoría de movilización de recursos y de oportunidad política de Tarrow (1970), la cual hace énfasis en entender el desenlace, desarrollo, éxito o fracaso de una movilización más allá de querer indagar sobre el porqué los sujetos se movilizan. También propone que la cohesión interna del movimiento permite movilizar recursos y oportunidades políticas, según el momento específico y las condiciones del conflicto. Lo anterior configura un modelo multifuncional de formación de movimientos sociales (Berrio,

2006). De ahí que, SINTRAINAGRO ha movilizado recursos en las diferentes huelgas -posteriores al 2008, de acuerdo al momento y condiciones específicas, estableciendo alianzas con sectores sindicales, estatales y empresariales -de acuerdo a la coyuntura. Sobre este punto se retomará más adelante.

La teoría de movilización de recursos y de oportunidad política surgió en la década de 1970 en los Estados Unidos (Guadalupe, 2003), después de la ruptura que generó la irrupción de nuevos movimientos sociales -estudiantil y ecologista-, contexto que exigía nuevas perspectivas teóricas para explicar el fenómeno, teniendo en cuenta que ni el marxismo ni el estructural funcionalismo estaban a la altura del nuevo fenómeno (Berrio, 2006). Tarrow (Como se citó en Berrio, 2006) plantea que:

La gente participa en acciones colectivas como respuesta a un cambio en la pauta de oportunidades y restricciones políticas y mediante el uso estratégico de la acción colectiva, genera nuevas oportunidades que serán aprovechadas por otros en ciclos de protesta cada vez mayores (p.226).

Por tanto, en este trabajo se entiende por movimiento social, siguiendo a Tarow (1998), como aquel que se produce en la medida en que “los actores sociales conciertan sus acciones, en torno a aspiraciones comunes, en secuencias mantenidas de interacción con sus oponentes o las autoridades” (p.19). Es decir, son aquellas colectividades en las que se comparten identidades, posturas y luchas contra un mismo oponente, éstas se expresan por medio de acciones conjuntas, con carácter permanente.

Estas perspectivas de análisis permiten, entonces, ver al gremio de corteros de caña como un movimiento social y al sindicato SINTRAINAGRO como una organización social de tipo sindical cohesionada, que comparte valores y que moviliza recursos de acuerdo con la coyuntura específica. En consecuencia, al hablar de movilización de recursos de acuerdo con la coyuntura, se establecen

alianzas con los empresarios de los ingenios, ejecutando acciones colectivas conjuntas en el marco de la defensa de la formalización laboral, del derecho a la organización sindical y de la defensa de la soberanía nacional.

Giarracca (2002), plantea la relación existente entre el fortalecimiento de la agroindustria y la acción de movimientos sociales, debido a que “se presentó esta conjunción de condiciones que, por un lado, arrinconan y excluyen a los campesinos y a los trabajadores, pero que, por el otro, habilitan nuevas oportunidades políticas” (p.246). Es decir, y retomando a De la Garza (2000), el nuevo contexto del capitalismo agroindustrial o de reestructuración productiva hace que nuevos movimientos sociales irruman en el escenario público, como es el caso de los paros de 2005, 2008 y las diferentes acciones colectivas que han desarrollado los corteros de caña hasta el día de hoy.

Este movimiento es social en la medida que plantea desafíos colectivos, tiene una concepción de objetivos comunes y potencia las relaciones de solidaridad y el mantenimiento de las acciones colectivas. Estas condiciones son las propiedades básicas de los movimientos sociales según Tarow (2004).

En su mayor parte se produce en el marco de las instituciones, por parte de grupos constituidos que actúan en nombre de objetivos que difícilmente harían levantar una ceja a nadie. Se convierte en contenciosa cuando es utilizada por gente que carece de acceso regular a las instituciones, que actúa en nombre de reivindicaciones nuevas o no aceptadas y que se conduce de un modo que constituye una amenaza fundamental para otros. (p. 24)

Ahora bien, en la transición hacia el capitalismo agroindustrial, y como lo plantea Machado (2002), la mano de obra incursiona en el mercado y bajo estas circunstancias, se establecen nuevas relaciones laborales (De la Garza, 2000), asociadas a las nuevas dinámicas de la estructura productiva: Apertura económica, encadenamientos productivos, flexibilización y precarización.

La contribución de este trabajo -a los anteriores ejes teóricos- tiene que ver con los conflictos laborales -en el contexto del sistema agroindustrial contemporáneo-, los cuales no se pueden entender sólo como un proceso antagónico entre trabajadores y empresarios. Es decir, el estudio aquí presentado muestra que la reestructuración productiva va más allá de un conflicto bimodal, sino que por el contrario genera alianzas entre sectores tradicionalmente vistos como opuestos - caso de corteros de caña y empresarios-, producto de la reacomodación del capitalismo agroindustrial contemporáneo.

En conclusión, los tres ejes teóricos del presente trabajo despliegan una amalgama de fenómenos, los cuales no se puede excluir del análisis. Ello significa, que el proceso de transformación de las prácticas, estrategias y discursos de los corteros de caña del Valle del Cauca -después del 2008, vinculados a SINTRAINAGRO, se desarrolla en el marco de fenómenos como: el neoextractivismo, la protesta social, la movilización de recursos y la oportunidad política, la precarización y flexibilización de las relaciones laborales, y la reestructuración productiva -que modifica la base socio técnica de la agroindustria azucarera del Valle del Cauca. Significando así, un principio de inter relacionalidad entre estos fenómenos, en la reinversión de la movilización laboral de corteros de caña del Valle del Cauca. A continuación, se presentará un balance sobre los estudios relacionados al objeto del presente trabajo.

3. Estado del arte

Literatura sobre la transformación de las prácticas y discursos de la movilización laboral desarrollados por SINTRAINAGRO posterior al año 2008, no existe hasta el momento. Los trabajos académicos existentes giran en torno a la movilización laboral de corteros de caña en el escenario de la agroindustria. Así pues, el presente balance se realiza teniendo en cuenta dos

grandes tipos de discusiones en las que se inserta este trabajo. En primer lugar, los debates sobre las relaciones laborales y el sistema agroindustrial del Valle del Cauca, y en segundo lugar, los debates sobre la movilización social de los corteros de caña.

En cuanto al primer tipo de discusiones, el trabajo de Mateo Mina (1975) ha sido fundamental para entender el proceso de consolidación social y económica de la agroindustria azucarera del valle del Cauca. Según el autor, este proceso fue apoyado por empresas y Estados extranjeros a partir de “acuerdos” impuestos al gobierno colombiano a inicios del siglo XX y promovidos por la clase emergente industrial. También señala que el poder, la propiedad y la producción de familias tradicionales como los Arboledas, en el Valle del Cauca, fueron reemplazados por exitosos comerciantes como las familias Eder, Barneys y Simmonds, quienes se enriquecieron gracias a los contactos que tenían en el mercado exterior (Mina, 1975).

Con la libertad de los negros esclavos, las grandes haciendas fueron quedando sin “brazos” por lo que “con el dinero de sus actividades comerciales y la ruina de las antiguas familias del Cauca, pudieron adquirir grandes porciones de tierra fértil. Y a medida que mejoraban las comunicaciones con Buenaventura, se podían embarcar en el tipo de agricultura de hacienda trabajada por peones, para producir exóticos productos de exportación” (Mina, 1975, p.76). Sin embargo, luego de la apertura de la ruta al mar en Buenaventura -por consiguiente, apertura a mercados extranjeros- se produjeron dos fenómenos importantes: el capital extranjero comenzó a fluir y “los campesinos fueron expulsados lentamente de las tierras y empujados a la trampa del trabajo asalariado”. (Mina, 1975, p.76).

De manera complementaria Mondragón (2007), plantea la tesis de que a inicios del siglo XX inicia el proceso de industrialización del país, amparado por normas proteccionistas por las crisis

del mercado internacional y por las guerras mundiales; situación que influenció la industria de la caña de azúcar en el Valle del Cauca. El crecimiento del mercado del azúcar permitió la fundación de más ingenios azucareros, esta vez por las familias de hacendados y comerciantes en Cundinamarca, Nariño y Tolima, pero fue en el Valle del Cauca donde las empresas azucareras identificaron el mayor éxito dadas las ventajas comparativas de sus haciendas, especialmente las proporcionadas por la calidad de sus suelos. Surgen por entonces los ingenios Río Píala de los Caicedo, Providencia de los Cabal y Mayaguez de los Hurtados Holguín, que siguen estando - hasta hoy- entre los principales productores. Agrega el autor que, con la implementación de las CTA muchos sindicalistas se vieron obligados a conformar los sistemas de producción empresariales subordinando a pequeños productores a estos mecanismos, con el propósito de recibir los subsidios. Otros, con sacrificio y lucha se mantuvieron sindicalizados (Mondragón, 2007).

Paralelamente Fernando Urrea (2007), explicó cómo los corteros de caña fueron llevados a asociarse en las CTA y su incremento entre el año 2002 y 2005, y expuso la influencia del TLC - entre Estados Unidos y Colombia- en las regulaciones laborales realizadas, a partir del año 2008, por el gobierno colombiano. Lo anterior, para cumplir con los compromisos internacionales y poder abonar el terreno para que las multinacionales ingresaran al país. Según Urrea (2007) los demócratas del entonces Congreso de los Estados Unidos eran partidarios de regularizar las CTA y la mecanización del proceso de producción de caña, teniendo en cuenta que sin dicha regulación los costos de producción de los empresarios colombianos disminuirían, lo que se traduciría en mayor competencia para las multinacionales que querían ingresar al país. Esto, debido a que, a mayor mecanización menores costos laborales y de producción para las empresas nacionales.

La CTA es una “modalidad de organización del enganche laboral equivalente a las agencias de empleo, pero sin pasar por las exigencias de la legislación laboral” (Urrea, 2007, p.119). Lo anterior es importante debido a que, la regulación de las CTA no ha sido coherente y definitiva para regular la contratación laboral (Urrea, 2007). Por tanto, bajo estas condiciones “el aumento y ampliación de la precarización laboral, corre parejo con una mayor volatilidad de los empleos y con ello una sensible reducción de los costos laborales para las diferentes clases de empresarios que participan en el sector” (Urrea, 2007, p.149).

La reestructuración de la empresa se refiere a toda una serie de procesos en los que se buscaba, en términos operacionales y de organización del trabajo, un aumento de la rentabilidad y la eficiencia de las actividades de la empresa. Esta reestructuración se apoya en gran medida en un proceso paulatino de tercerización, que permite reducir la carga prestacional y los costos laborales en el campo y la fábrica, pero en una primera etapa la reducción más importante se operó en las labores del campo. (Urrea, 2007, p.149).

Como consecuencia de los grandes beneficios que ofrece el no reconocimiento de la relación laboral, para el año 2002 habían registradas diecisiete CTA en los municipios de Palmira, Buga, Cali y Zarzal. Para el año 2005 se registraron ochenta y dos CTA en los municipios de Palmira, Candelaria, Florida, Pradera, Guacarí, Buga, Argelia, Zarzal, Cerrito, Tuluá, Bugalagrande, Roldanillo, Obando, Cali, Cartago, Miranda y Puerto Tejada (Urrea, 2007). Frente a este hecho, el dirigente sindical Jhonson Torres (J, Torres, entrevista junio, 17, 2017), plantea que el sector de la caña de azúcar fue priorizado como uno de los cinco sectores -en Colombia- en donde se debían formalizar y mejorar las condiciones de trabajo, puesto que, eran evidentes las violaciones a los mínimos derechos laborales de los trabajadores del sector de la caña.

Stefano Farne (2008), expone un balance de la política gubernamental respecto a las CTA, donde señala que dichas figuras no respondieron al espíritu que el cooperativismo sugiere, y que en la práctica no hay una relación directa con éste. También plantea cinco aspectos para entender

la proliferación de estas figuras: el clientelismo y la corrupción política, el impulso que el gobierno les dio especialmente en el sector salud, los bajos costos laborales, menores impuestos y las ventajas de outsourcing. Según el autor no queda claro por qué se están regulando posteriormente al año 2008 -en este trabajo se explicará por qué se da la regulación y por qué es posterior al 2008.

En este mismo año Castaño presenta un análisis sobre la manera en que fueron implementadas las CTA en Colombia, pero especialmente en el Valle del Cauca, y de manera más concreta en el Ingenio Mayagüez. De este estudio, advierto aspectos relevantes para mi investigación, entre ellos, por un lado, la percepción positiva de algunos corteros de caña en especial los gerentes de las CTA respecto a dicha manera de subcontratación, dado que les permitió establecer un mayor control “sobre la masa salarial que le entrega la empresa a cada CTA bajo la modalidad de un contrato de prestación de servicios, lo cual era inexistente antes cuando predominaba el contratista particular, prestándose ello a todo tipo de arbitrariedades por este último.” (Castaño, 2008:89). Por otro lado, explica cómo en el periodo 2002-2003 se incrementaron las CTA en sector azucarero como respuesta a los beneficios tributarios -no pago de parafiscales- otorgados por la reforma laboral de 2002, y cómo una medida impulsada por los empresarios con el propósito de disminuir los costos de producción. (Castaño, 2008, p.89).

Posteriormente, Vallejo (2016), explica el proceso por el cual se transforman las relaciones laborales en la agroindustria azucarera del Valle del Cauca. En primer lugar, los cambios ocurridos en la década de 1980 y 1990 con los ajustes estructurales que modificaron las relaciones laborales y las formas de producción en la industria en el contexto de globalización, y su relación con las

reformas laborales implementadas hasta el 2006⁵. En la década del 1980 inicia el proceso de ajuste de las relaciones laborales el cual es cristalizado por la reforma laboral de 1990, flexibilizando aún más los mercados de trabajo y eliminando los estímulos a la rotación de personal. Por ello, “a partir de año 83 (...) hay una mayor flexibilidad en el enganche y despido de personal y el empleo industrial responde, por consiguiente, a los ciclos de la actividad económica”. Así pues, resalta Vallejo, el mercado del trabajo se volvió más sensible a partir de la década de 1980 más competitivo y sensible a las condiciones de los mercados externos de trabajo, elevando la flexibilidad del trabajo y la tasa de rotación del empleo industrial “de manera que hay una mayor flexibilidad en el enganche y despido de personal y el empleo industrial responde, por consiguiente, a los ciclos de actividad económica”. (p. 32).

En segundo lugar, explica un fenómeno muy importante para entender por qué los corteros entraron en huelga en el año 2008, el cual tiene que ver con – más allá de la implementación de las EAT, las CTA y los contratos sindicales que precarizaron aún más las condiciones sociales y económicas de los corteros- el cambio en el tipo de caña de azúcar sembrada, que significó una caña más densa para el corte, por tanto, con mayores niveles de exigencia. Esto se tradujo en reducción del salario, bajo el esquema del salario al destajo por el cual se regían en ese entonces los salarios de los corteros de caña de la agroindustria azucarera del Valle del Cauca. Este cambio lo explica Vallejo y sugiere -aunque sin evidencia empírica- su relación con la apertura de destilerías para la producción de etanol en los ingenios. En este punto se trata de apoyar con información este argumento.

⁵ Vallejo expone un diagnóstico ilustrativo respecto a las leyes que reformaron las relaciones laborales en Colombia: la ley 50 de 1990, la ley 100 de 1993, ley 789 y ley 776 de 2002, ley 797 de 2003, ley 828 de 2003, ley 860 de 2003, acto legislativo del 2005.

Y, finalmente, explica el proceso organizativo de los corteros de caña de una manera muy rigurosa, como también las maneras en que se expresaron los empresarios y las alianzas con el gobierno de ese entonces.

La Procuraduría General de la Nación, Dejusticia y USAID, publicaron el texto Trabajo digno y decente en Colombia (2017), en el cual realizaron un seguimiento al marco normativo laboral, que brinda elementos para trazar una línea jurisprudencial y de interpretación respecto a la implementación y a la posterior regulación a las CTA.

Las nuevas prácticas de empleo en Colombia se explican por la nueva estrategia del empresariado y por la orientación del proceso de reestructuración de la administración pública. Una estructura organizacional cada vez más fragmentada y un Estado con una burocracia cada vez más pequeña, son funcionales al proceso de tercerización del empleo. Existe pues, una conexión estrecha entre la consolidación de pequeños núcleos de trabajadores con vínculos laborales estables y plenamente cubiertos por las garantías propias del contrato de trabajo tradicional, y la proliferación de formas de tercerización donde las modalidades de trabajo son cada vez más efímeras y no alcanzan a ser cobijadas por la protección del derecho laboral (Procuraduría, 2017, p.101).

Por otra parte, respecto al sistema de la agroindustria, Arias (2017), explica que el capitalismo agroindustrial opera a través de megaproyectos orientados a la explotación de biomasa, como lo es la caña de azúcar, la palma, los pinos, el eucalipto y la madera. Sumado a los sistemas de infraestructura de transporte y energía, en el marco de los planes Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) e Integración y Desarrollo Mesoamérica, “los cuales contemplan la construcción de complejos sistemas de infraestructura en materia de comunicaciones, energía y transporte (hidrovías, puertos, corredores bioceánicos)” (p.21).

En particular, los planes nacionales y las políticas sectoriales de las dos últimas décadas han establecido las condiciones legales, financieras e institucionales necesarias para promover la inversión extranjera directa. En este esquema, las empresas privadas y extranjeras se ven como los únicos agentes con alto potencial de impulsar el crecimiento económico del país. En este orden de ideas, las inversiones de estos gigantes se atraen mediante la ausencia de impuestos, garantías tributarias y la posibilidad de explotar mano

de obra barata y de externalizar impactos ecológicos, culturales y sociales. (Arias, 2017, p.32).

En esta misma línea, se logra identificar como a nivel de política pública en Colombia, desde el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, (2002-2010) se ha venido facilitando el escenario para la extracción de materias primas, como lo es la caña, consolidándose -posteriormente- en el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para Todos” (2010-2014) de Juan Manuel Santos, que declara al modelo extractivo como principal locomotora de desarrollo.

En el Plan Nacional de Desarrollo Prosperidad para Todos (2010-2014), el sector minero-energético y el agropecuario se establecieron como locomotoras de desarrollo. Este propósito es retomado en el actual Plan Nacional de Desarrollo, Todos por un Nuevo País (2014-2018), en el denominado eje transversal de transformación del campo y crecimiento verde que busca consolidar la agroindustria y la gran minería. (Arias, 2017, p. 32).

El departamento Nacional de Planeación y el Consejo Nacional de política Económica y Social, produjo el documento Conpes 3510 en el año 2008, el cual contiene los lineamientos de política pública para “promover la producción sostenible de biocombustibles en Colombia”, basados en los principios de coordinación, complementariedad y subsidiariedad. En el documento juegan un papel importante el Ministerio de Minas y Energía (MME), el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT), Ministerio de Protección Social (MPS), Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), Ministerio de Transporte (MT) y Colciencias, dado que fueron las instituciones estatales encargadas de la ejecución de la política pública de agro combustibles en Colombia. Dicho Conpes se produce en el contexto de los mercados emergentes de “biocombustibles”, los cuales permiten diversificar las fuentes energéticas locales, susceptibles de ser explotadas en el mercado internacional, partiendo de la base de una estructura productiva basada en condiciones de “eficiencia” (CONPES 3510, 2008).

En los estudios sobre la movilización de corteros de caña -en el marco de las demandas por mejoras en las condiciones laborales y su relación con el sistema agroindustrial-, es importante señalar el trabajo realizado por Sánchez (2008). En un análisis histórico, explica el crecimiento de luchas sindicales y especialmente las huelgas de la década de 1970 en el ingenio Riopaila, también explica el contexto de despidos masivos que produjo la huelga de 1976 la cual fue producto de un complejo escenario de luchas de los sindicatos de base y de industria en el Valle del Cauca, tensiones que fueron desarrollándose desde 1973. Este autor plantea que el primer paro ocurrió el 27 de diciembre de 1973, se reactivó el 2 de enero de 1974 y luego explica los sucesos que desencadenaron la huelga del 19 de enero de 1976, huelga histórica del movimiento sindical de la agroindustria de la caña de azúcar del Valle del Cauca. Al respecto señala,

En verdad, se trata no de una huelga en Riopaila, sino de varias con epicentro en distintos ingenios y trapiches, en que el Ingenio Manuelita fue la matriz inicial de la industria y de las huelgas. Las dos grandes movilizaciones aquí estudiadas tuvieron como motor a Riopaila y sacudieron la sociedad señorial-burguesa del Valle del Cauca, con repercusiones en la política nacional y en la conciencia de los trabajadores en el país. No existe continuidad lineal en las luchas, ni un acumulado permanente. Pero sí existe una tradición de luchas, unas memorias que constituyen la praxis histórica de la clase trabajadora. La lucha antiesclavista en la sociedad colonial y republicana tuvo una profundidad y radicalismo de gran dimensión, y se mantuvo en una saga de recuerdos y olvidos, de recuperaciones y herencias en la cultura popular radical. (Sánchez, 2008, p. 56)

Por otro lado, Hernando Uribe Castro expone elementos sobre las resistencias comunitarias de pobladores locales del Valle del Cauca, en el contexto de la expansión de la agroindustria de la caña de azúcar, y centra su análisis en el impacto sobre el sistema socio ecológico, en las resistencias de tipo ambiental de los pobladores desde la década de 1970 y en algunos elementos sobre las resistencias de tipo laboral. También señala la relación entre la expansión del clúster agroindustrial de la caña de azúcar con las transformaciones del capitalismo mundial. Este autor plantea que el análisis -desde una perspectiva sistémica- permite entender la relación entre los factores estructurales del sistema de la política económica mundial y su incidencia en Colombia y

en la región, influyendo en las condiciones favorables para el mercado del azúcar y el incremento de su producción en Colombia. Así, dichas condiciones contribuyeron no solo a que las empresas agroindustriales incrementaran el área sembrada y la producción de azúcar, si no también, a los nocivos efectos en el uso del suelo del valle geográfico del río Cauca y los ecosistemas de humedal (en el agua, en el aire, en el suelo y en el subsuelo), así como a que los grupos humanos fueran obligados a desplazarse a la ciudad o a convertirse en mano de obra asalariada de los ingenios. Sumado a ello, se fortalecieron las resistencias ante los embates de las nocivas consecuencias del cultivo y producción de la caña de azúcar (Uribe, 2014).

Por su parte, Marulanda (2012) esbozó una línea de tiempo que permite identificar el año en que surgieron distintos sindicatos al interior de los ingenios azucareros. El primer sindicato en la agroindustria azucarera fue constituido en el ingenio Manuelita en el año 1935, y en la década de 1970 cada ingenio contaba con uno o dos sindicatos, lo que fortaleció las huelgas de 1973, 1975 y 1976 en los ingenios El Arado, El Papayal, y Oriente.

Los sindicatos obreros azucareros se afiliaron al Sindicato de Trabajadores de la Caña de Azúcar de Colombia (SINTRACANAZUCOL), el cual en 1975 presentó pliego de peticiones. Sin embargo, durante las huelgas se constituyeron comités que operaron bajo un esquema de participación directa y democrática superando la estructura formal de los sindicatos (Marulanda, 2012).

Montoya (2012), realizó una descripción sobre los repertorios de acción colectiva del paro de corteros de caña del año 2008, en donde plantea la importancia de realizar una revisión profunda y analítica sobre los efectos de dicha movilización. También describe los actores que se involucraron en dicha confrontación: La Organización Interamericana del Trabajo, centrales

obreras del país, miembros de partidos políticos de izquierda -como el Polo Democrático, y el entonces gobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía.

En conclusión, existe un vacío no solo de trabajos que indaguen sobre la transformación de las prácticas y discursos de la movilización laboral de los sindicatos de la agroindustria azucarera vallecaucana, así como también son escasos los análisis sobre la existencia de las nuevas condiciones en las que se presenta el conflicto, es decir, en el escenario de las alianzas entre corteros de caña y empresarios de la caña. También debe ser profundizada la relación existente entre los estudios de la economía política de los agrocombustibles con los estudios de experiencias locales de movilización de trabajadores rurales como las del Valle del Cauca en Colombia, para comprender la articulación entre la dimensión global del capitalismo agroindustrial contemporáneo con sus implicaciones locales: reordenamiento del conflicto, nuevos actores, y nuevas disputas.

4. Historias de machete al cinto

Este primer capítulo, plantea que, aunque la movilización de corteros de caña -desde 2008- expuso nuevas realidades, es un conflicto anclado a las viejas prácticas de explotación, desigualdad, precariedad y despojo del capitalismo rural. Así pues, se expone el desarrollo de la movilización social de corteros de caña, desde la segunda mitad del siglo XX hasta hoy, y su relación con el desarrollo de dispositivos agroindustriales en la estructura productiva azucarera, determinantes para la movilización social.

Taussig (1975) y Mondragón (2007), se remontan a la producción de azúcar de caña -de la época de la conquista española- en donde se usaba mano de obra esclava, principalmente indígena,

y posteriormente esclavos de origen africano. Luego del proceso de libertad parcial para esclavos, en el siglo XIX, familias como los Holguín, Mosquera o Arboleda controlaban en la colonia las haciendas en el Valle del Cauca y Cauca. Mondragón (2007) plantea que en 1854 fue derrotada la revolución que pretendía oponerse al libre comercio para la proteger la producción artesanal y desarrollar la industria nacional, las tropas de los hacendados lograron imponerse frente a los artesanos y al ejército nacional, gracias al apoyo material de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Prusia (Mondragón, 2007). El resultado de este conflicto fue el atraso de medio siglo de la industrialización del país y el control de los hacendados del campo “que impusieron las relaciones económicas, dejando la producción de caña al trabajo servil.” (Mondragón, 2007, p.18).

Luego la industria de la caña azucarera en el Valle del Cauca empezó a crecer de manera rápida desde 1934, con la misión Chardon solicitada por el gobierno colombiano, que consistió en una evaluación y recomendaciones encomendadas a expertos -Chardon- respecto a las mejoras que debían hacerse en la industria de la caña, sumado al establecimiento del Colegio Agrícola de Palmira. Esta misión representa el inicio de la innovación tecnológica agrícola en el sector de la caña, donde se intenta hacer una inmensa fábrica dedicada a la caña de azúcar para la exportación (Mina, 1974). Uribe (2014) describe cómo se conformó el clúster agroindustrial de la caña de azúcar.

El gremio se vio beneficiado por un conjunto de organizaciones de gran impacto. Una de ellas es la constitución de la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (ASOCAÑA) en 1959 que tenía por objetivo, representar al sector azucarero colombiano en las negociaciones internacionales. Luego, aparece la Comercializadora Internacional de Azúcares y Miel S.A. (CIAMSA) fundada en 1961 y que se encarga de realizar la comercialización y operación logística de la exportación de azúcar y miel. Por iniciativa de Asocaña, hacia 1977 se funda el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia (CENICAÑA), como una corporación privada sin ánimo de lucro, fundada en 1977. También Asociación Colombiana de Técnicos de la Caña de Azúcar (TECNICAÑA) que es responsable de la permanente capacitación y transferencia de tecnología hacia los técnicos del sector. (p.22).

En 1949 la Caja Agraria firmó un contrato con el Banco de Reconstrucción y Fomento, por valor de cinco millones de dólares para la importación de maquinaria (Mina. 1975). Este mecanismo hacía parte de las exigencias que los Estados Unidos y países europeos le hacían a Colombia para importar maquinaria extranjera. Antonio García (1981), llamó a este proceso, transformación de la estructura agraria en la década de 1970.

Por otro lado, la historia de la movilización de corteros de caña tiene un hito importante en la década de 1970, por cuanto en el año 1976, en el ingenio Rio Paila, uno de los ingenios más grandes del sector azucarero, sindicatos de base realizaron una huelga contra el sistema de contratistas. En ella exigían la formalización como trabajadores, teniendo en cuenta que bajo este sistema no tenían ningún vínculo laboral con los ingenios y por tanto, ningún tipo de seguridad.

Según Mondragón (2007), de los ingenios existentes en el Valle del Cauca en 1977, doce (12) de ellos pertenecían a cuatro familias, es decir, el 73,3 % del mercado azucarero. Los Caicedo eran dueños del 30%, los Eder eran dueños del 24%, los Cabal del 17,8% y los Garcés del 4,5%. El autor denominó a esta distribución como un oligopolio.

Cabe señalar que, el sistema de contratistas proviene de finales de la década de 1950 y es el proceso por el cual los dueños de los ingenios arrendaban grandes extensiones de tierra a terratenientes para la producción de caña. Entonces, la caña era cultivada por grandes terratenientes dependientes de los ingenios por medio de contratos, quienes a su vez subcontractaban a jornaleros independientes denominados “piratas”, “contratados” o “iguazos” (Mina, 1975). Esta subcontractación se realizaba para las labores de siembra, corte y recolección de caña de azúcar. Los trabajadores precarizados no tenían derecho a formar sindicatos, ni a la huelga, ni a seguridad

social; pero al mismo tiempo eran la base primaria de la cadena productiva de la industria de la caña, es decir, sin ellos no había industria.

Este sistema que surgió en 1959 fue llamado por ASOCAÑA “sistema horizontal”, y tuvo los siguientes efectos: en primer lugar, despojo de tierras del campesinado por la expansión de la industria de la caña; inexistentes garantías laborales y de capacidad de organización sindical del gremio de corteros; apertura del proceso de desmembración del campesinado (Antonio García, 1981); y generación de “esclavos modernos” en el sentido que Mateo Mina lo plantea (1975).

Así pues, tener presente dicho contexto es importante para entender el actual escenario en el cual se da la movilización de corteros de caña, dado que de esta manera se fueron abonando las condiciones de explotación actual en el marco de la producción agroindustrial. En el año 2003 - pero con mayor fuerza en el 2005- y después de tres décadas de cese de huelgas, 2.458 corteros de caña protagonizaron -durante ocho días- una movilización en el ingenio La Cabaña e Incauca respectivamente, nuevamente contra el sistema de contratistas y contra la mecanización del proceso de producción; adicionalmente, exigían salud, vivienda, y educación. Producto de ello, el 23 de diciembre de 2005 surge el hoy extinto Sindicato Nacional de Corteros SINALCORTEROS, con 30 afiliados, logrando algunas de sus peticiones. Sin embargo, de este contexto surge también la implementación de las CTA.

Una caña cortada con materia extraña del 6% valía la mitad de la que tenía la materia extraña del 1%, entonces era una manipulación terrible. Los contratistas llegaron al punto que la plata llegaba y daba la vueltica y después llegaba al mismo bolsillo de ellos. Le prestaban plata al trabajador, le prestaban \$100.000 pesos al 10% semanal, a los ocho días le sacaban \$110.000. Ellos tenían unas bodegas donde vendían los elementos fundamentales de la alimentación, se los fiaban con precios con más de 35 % con relación

al mercado, le ponían a circular la plata. A esos niveles de explotación se llegó con el sistema de contratistas. (Tigreros, 2017)⁶.

Cabe señalar, que la aparición de las CTA en el Valle del Cauca se dio en el 2002-2003 y estuvo relacionada con los beneficios tributarios – no pago de parafiscales- que establecía la reforma laboral del año 2002. El empresariado azucarero le dio un fuerte impulso a esta figura motivado por los beneficios laborales que aseguraban el suministro regular de mano de obra, también una mayor productividad con menores costos para las empresas (Castaño, 2008, p 86). El impacto de las CTA como mecanismo de subcontratación fue percibido por los gerentes de las CTA – corteros de caña como los demás- como positivo, ya que les permitió un mayor control sobre la masa salarial que les entregaba las empresas a cada CTA bajo la modalidad de un contrato de prestación de servicios (Castaño, 2008, p 89).

No obstante, los paros del 2003 y 2005 obtuvieron unos resultados que se trasladaron a los Ingenios Castilla, Mayagüez, Manuelita, Providencia y Pichichí, consiguiendo a su vez el comienzo de un trabajo de reorganización del proletariado cañero.

El número de cooperativas e intermediarios se redujo sustancialmente y algunas de las prestaciones pasaron a ser responsabilidad directa de los ingenios. No se derrotó totalmente el sistema, pero se debilitó. Las condiciones de remuneración mejoraron en porcentajes superiores a 25%, incluido el reconocimiento por seguridad social y otras prestaciones legales (Tribuna Roja, 2017).

Tres años más tarde, se presentan dos fenómenos relevantes que están relacionados con el cambio en las estrategias de movilización de los corteros y el nuevo escenario de movilización. Por un lado, en 2008, corteros y familias entraron a huelga 56 días en 9 ingenios azucareros, exigiendo -nuevamente- la formalización laboral, el derecho a la negociación colectiva y el

⁶ Materia extraña significa que cuando se corta la caña, viene con suciedad como tierra, desechos, etc. Es decir, la caña no se entrega al complejo limpia en su totalidad, sino con materia extraña. De esta manera llega la caña cortada para ser molida en la fábrica, lo que se llama proceso de molienda.

reconocimiento sindical. Se exigía, básicamente, una reforma a la fórmula de las CTA; las exigencias se lograron -parcial y especialmente- en el ingenio Incauca. Asimismo, en 2008, la huelga se hace en el marco de la inauguración de las plantas de etanol en el Valle del Cauca. Algunos de los actores involucrados en dicha huelga fueron: SINALTRAINAL, SINTRACANÁIZUCOL, SINALCORTEROS y el Movimiento 14 de junio.

(...) El comercio se vino al piso, todos esos pueblos parecían fantasmas porque los ingenios sin moler y sin producir, entonces se sintió el paro en todo el Valle del Cauca. Eran los nueve ingenios más grandes: Incauca, Manuelita, Providencia, Pichichi, Mayaguez, Castilla, etc., es decir, estaba el 78% de la producción azucarera del Valle parada, la pelea era contra ASOCAÑA, o sea, contra los ingenios, específicamente (A, Tigreros, entrevista, junio, 18, 2017).

Producto de la movilización de corteros de caña, se lograron formalizar 8000 corteros en diferentes ingenios azucareros, según el dirigente sindical. Sin embargo, y como aspecto interesante de este nuevo escenario, esta decisión también tuvo que ver con que el sector del azúcar fue priorizado por el Gobierno Nacional para la formalización laboral en el marco de la firma del TLC con Estados Unidos. Al respecto Mondragón (2007), planteó que con la firma del TLC la importación de materias primas, especialmente maíz estadounidense, incrementaría debido al aumento de cuotas de importación, por lo cual los proyectos en curso -a partir de yuca y caña panelera- se verían gravemente golpeados.

En segundo lugar, el paro del 2008 reveló que las disminuidas condiciones de trabajo estaban relacionadas – más allá de las CTA - con el tema del peso y la forma en que los ingenios pesaban la caña, es decir, no tanto con el proceso de deslaborización producto de la implementación del sistema de CTA (Vallejo, 2016).

En realidad, el deterioro de las condiciones de trabajo se dio por dos fenómenos. Primero, el incremento del esfuerzo del trabajador cortero para obtener un jornal diario equivalente a lo que

obtenía antes debido a la reducción del tamaño de la caña que se cortaba y a la variedad de caña de azúcar implementada en el 2005 en los ingenios. “Como es sabido, a los corteros se les paga por el sistema de destajo, es decir, por la caña cortada según el peso” (Vallejo, 2016. P 49). Lo anterior, está asociado con la reducción del tonelaje de la caña cortada debido al “tamaño más reducido de las cañas, asociado a una menor edad, así como por la implementación de las variedades de caña con menos peso, resultantes del continuo proceso de modificación que hace la agroindustria en Cenicaña” (Vallejo, 2016. P 49). Por ello,

La equivalencia entre tajos y toneladas de caña cortada es incierta o al menos determinada por varios factores. Según el testimonio de un cortero del Ingenio La Cabaña en 2005, “antes de un tajo de caña...salían tres toneladas de caña”. La tendencia es la reducción del tonelaje de caña por tajo. Una explicación de este fenómeno la recibió Mauro Angulo Prado por parte del ingenio: “Nos dicen que ahora la caña se corta a menor edad, y que por las mejoras que han hecho en los cultivos la caña ya viene con menos jugo, pero más contenido de sacarosa, y que por eso pesa menos” (Aricapa, 2016: 19)” (Vallejo, 2016. P 48).

Y segundo, el decrecimiento de los ingresos de los trabajadores está relacionado a la inestabilidad en la jornada de trabajo la cual está asociada al proceso de mecanización de la producción de azúcar especialmente en el alce y el transporte de la caña. El argumento empresarial de los ingenios para la mecanización estuvo asociado a la competitividad de la industria en nuevos mercados internacionales en el contexto de la globalización, lo que resultó problemático para los trabajadores corteros de caña.

Así pues, “La tendencia hasta el 2008 en el reemplazo del corte manual por corte mecanizado es una de las fuentes de malestar de los corteros que decidieron ir a la huelga”. Sin embargo, el uso de maquinaria –el cual proviene de la década de 1970– presentó limitaciones técnicas relacionadas con las características de la caña, las condiciones del clima, el contenido en materia extraña, la presencia de residuos y el encalle de la maquinaria (Vallejo, 2016. p.47), y a las consideraciones sociales y políticas de gobernabilidad (Vallejo, 2016. p.53) y no a las a razones

altruistas de los empresarios. Ante ello el uso de mano de obra para el corte con salarios más bajos a través de condiciones de trabajo más duras, tema que tuvo enorme importancia en la huelga del 2008. Este es otro factor importante para tener en cuenta en el contexto de la reestructuración productiva sobre todo con la producción de etanol.

Lo anterior, permite entender que el movimiento huelguístico del 2008 no fue liderado por los sindicatos, más bien fue el resultado de la implementación del esquema de las CTA como muestra Vallejo (2016). Parafraseando a Urrea (2019), la sindicalización que sigue a la formalización en varios ingenios se soportó en el desmonte de las CTA, pero éstas fueron la clave del conflicto porque se devolvieron contra el diseño empresarial que montaron las CTA al modo de efecto boomerang (Urrea, 2019)⁷. Lo anterior es de suma importancia para entender el cambio que va a permitir el conflicto polivalente.

En conclusión, como lo señala Vallejo (2016) los corteros estaban siendo sometidos a un fuerte incremento en la plusvalía absoluta con todas las consecuencias del desgaste considerable de la salud de los corteros y de la disminución de sus salarios. Esto agravado por las pobres afiliaciones al sistema de seguridad social que podían adelantar las CTA, sumado al proceso de mecanización y al incremento de los alimentos en el año 2008. Ciertamente esto develó la miseria salarial y de condiciones laborales en las que estaban los corteros y constituyó un elemento de deslegitimación social del gremio azucarero ante la opinión pública local, regional y nacional (Urrea, 2019).

En la actualidad, si bien los corteros de caña conservan la consigna del reconocimiento sindical, de la formalización laboral y de la defensa de las convenciones colectivas, la movilización se da

⁷ Este argumento es de autoría de Urrea quien retoma el trabajo de Vallejo y fue sugerido en el proceso de evaluación de este trabajo. Sin embargo, dicho argumento no está publicado en ningún texto.

por la formalización de 30.0000 trabajadores y trabajadoras de oficios varios de los ingenios azucareros, la defensa de la producción nacional de azúcar y panela, la defensa de 188.000 puestos de trabajo directos y 780.000 indirectos del sector azucarero, amenazados por la importación de azúcar; el rechazo a los tratados de libre comercio entre el gobierno colombiano y Estados Unidos, el rechazo a los pactos multilaterales que afectan la economía local y nacional, y contra las sanciones que el gobierno colombiano impone al sector azucarero por medio de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la amenaza de desaparición del FEPA que afecta la producción nacional y del SAFP.

Al respecto, dos hechos importantes se deben tener en cuenta, en el año 2014 el ex senador demócrata y mano derecha del ex presidente Obama, Joe Biden, envió una misiva al ex presidente de Colombia -Juan Manuel Santos- en la que expuso su respaldo en la ambición de Colombia de ingresar a la OCDE, debido a que “la prosperidad de Colombia es de interés para la seguridad nacional de Estados Unidos” (El Espectador, septiembre, 2014). Sin embargo, y a renglón seguido, lamentó las restricciones que por medio de la Resolución 90454, del ministro de Minas y Energía, se impusieron a la importación de etanol “en la eventualidad de que la oferta local no atienda el 100 por ciento de la demanda” (Espectador, septiembre, 2014).

Posteriormente, en el año 2015 la SIC sancionó a Asocaña, Ciamsa (CI Azúcares y Mieles), Dicsa (Desarrollos Industriales y Comerciales), Manuelita, Riopaila Castilla, Central Tumaco y los ingenios del Cauca, Providencia, La Cabaña, Pichichi, Risaralda, Carlos Sarmiento - Ingenio San Carlos, Carmelita y María Luisa, por \$320.000 millones, argumentando cartelización empresarial para obstruir importaciones de azúcar de Bolivia, Guatemala, El Salvador y Costa Rica (Espectador, 2015). Estos hechos hacen parte de la reestructuración productiva, realizada en

Colombia en el marco de los compromisos y el enfoque en asuntos apremiantes sobre los cuales Colombia tenía que legislar.

Con la aplicación del paquete neoliberal asociado a la adaptación de las estructuras productivas a una mayor competencia en los mercados, la revalorización y jerarquización de los factores productivos, el control cada vez mayor que ejercen los países industrializados en el campo tecnológico, el papel del mercado financiero internacional, el cambio en las reglas del juego del comercio internacional, y la reducción de los tiempos y distancias (Machado, 2002), hubo una reestructuración productiva la cual generó un conflicto que se manifiesta de maneras diferentes, es decir, no es un conflicto blanco y negro, sino que escenifica un conflicto polivalente.

En consecuencia, se establece la política pública de agrocombustibles en Colombia, proceso que se venía preparando desde el gobierno Pastrana (1998-2002), la cual está estrechamente relacionada con la reestructuración productiva de la agroindustria y con la acción colectiva entre corteros de caña y empresarios nacionales. La política pública presenta dos momentos para entender la evolución de los agro combustibles: en primer lugar, desde 2001 hasta 2010, periodo en el cual otorgó descuentos tributarios y fortaleció a la agroindustria nacional de la caña de azúcar, por medio de instrumentos y políticas como la ley 693 de 2001 (la cual estimuló el uso y la producción del alcohol carburante, estableciendo que a partir del 27 de septiembre de 2005 la gasolina en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla debía contener un 10% de alcohol carburante); la Ley 788 de 2002 (que introdujo las exenciones de IVA, Impuesto Global y Sobretasa al componente alcohol de los combustibles oxigenados); y por último la resolución 180687 de 2003 en donde el Ministerio de Minas y Energía reglamenta la producción, acopio, distribución y puntos de mezcla de los alcoholes carburantes y su uso en los combustibles nacionales e importados, el

Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar e implementación de las Cooperativas de Trabajo Asociado, las cuales, tienen un efecto de reducción de costos de producción para los empresarios.

En segundo lugar, desde el 2010 hasta la actualidad, se da en el marco de la firma del Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y la reestructuración productiva que ello implica, cumpliendo con lo que el Conpes 3510 de 2008 plantea: “de tal forma que estos energéticos puedan competir con los combustibles fósiles sin la necesidad de subsidios en el mediano y largo plazo” y “reducción de los costos de producción de los biocombustibles en los puntos más críticos de la cadena productiva” (p.22).

Como ya fue mencionado, se abandonan -progresivamente- los mecanismos de protección y financiación de la agroindustria de la caña como el FEPA, a favor de la importación de etanol y azúcar proveniente de países como Brasil y Estados Unidos. Sumado a las directrices de la OCDE, en materia de flexibilización comercial y a la regulación de las CTA, a favor de incrementar los costos de producción de caña para los empresarios nacionales, beneficiando la importación de azúcar y etanol. Lo anterior, proviene de los compromisos asumidos por el gobierno de Santos en el marco del tratado de libre comercio firmado con Estados Unidos.

Es así como la implementación de la política de agro combustibles ha sido coherente con el escenario de apertura de mercados, pero produjo efectos polivalentes teniendo en cuenta lo siguiente: se han generado alianzas impensables -antes del 2005- entre corteros de caña y empresarios de la agroindustria, a favor de la defensa de la producción nacional y en contra de las políticas de importación que afectaron los casi 190 mil puestos de trabajo. Y la implementación de las CTA -y su posterior regulación- hizo que el movimiento sindical de corteros de caña se

fortaleciera, en contravía al propósito inicial, el cual tiene que ver con la pérdida de capacidad organizativa de los sindicatos de la agroindustria de la caña de azúcar.

No obstante, no se puede leer este complejo entramado del escenario de la agroindustria azucarera única y exclusivamente desde la lupa de los intereses de la agroindustria mundial, es decir, sin exponer el apoyo internacional y la solidaridad de clase que la AFL-CIO prestó al movimiento de corteros de caña de la agroindustria azucarera vallecaucana. Los repertorios de acción colectiva de los trabajadores corteros fueron apoyados y fortalecidos por la AFL-CIO -la organización de trabajadores más importantes sindicalizados en Estados Unidos-, quien acompañó la huelga del 2008 y ha acompañado el proceso de formalización y sindicalización posterior, no sólo en el sector de la agroindustria azucarera sino también en el sector de la palma, de puertos y de empleadas de servicios domésticos (Urrea, 2019).

Al respecto, el 13 de julio de 2012 se llevó a cabo en la ciudad de Cali el lanzamiento del Consejo Laboral Afrocolombiano, planteándose el objetivo estratégico de generar una agenda en temas laborales para generar políticas públicas e interlocutar con el gobierno y las centrales sindicales, a través de la comisión de concertación. De fondo se planteó como un escenario para la transformación de las crudas realidades laborales de hombres y mujeres de la población negra. El evento fue auspiciado por el Centro de Solidaridad de la AFL-CIO.

En consecuencia, la AFL-CIO y sectores progresistas del partido demócrata estadounidense siguieron muy de cerca el paro de corteros de 2008 y los procesos de formalización y sindicalización posteriores. Este contexto, complejiza la interacción de los Estados Unidos con el gobierno colombiano de la época y el conflicto polivalente que acá se presenta.

5. "Las contradicciones no se zanjaron, pero si se acaba la empresa se acaba el trabajo"

En este capítulo, se explicará por qué los nuevos discursos y estrategias de movilización de los corteros de caña afiliados a SINTRAINAGRO representan un conflicto polivalente, de acuerdo con las estrategias de acción colectiva y discursos que los corteros de caña han adoptado en medio de la reestructuración productiva. La teoría de movilización de recursos plantea que las personas participan en acciones colectivas, en respuesta al cambio en la estructura de oportunidades y a las restricciones políticas mediante el uso estratégico de la acción colectiva (Tarow, 1994), teoría que permite entender el carácter polivalente del conflicto.

El repertorio de acción colectiva del movimiento de corteros de caña ha sido polivalente, puesto que, se ha manifestado en varios sentidos, configurando lo que acá denominamos conflicto polivalente. Interesa aquí explicar, dos de las caras posibles de dicho conflicto, por un lado, la reproducción del conflicto obrero patronal tradicional, y por otro, el establecimiento de alianzas entre actores tradicionalmente enfrentados, con el propósito de generar repertorios de acción colectiva contra las políticas neoliberales del gobierno de Santos, es decir, hay un cambio significativo en los actores contra los cuales se movilizan los corteros.

Así pues, conflicto polivalente quiere decir que las acciones colectivas de los corteros se deciden en el marco de una estructura de oportunidades, que les asignan a sus marcos de acción colectiva un carácter cambiante, mutable y no estático de acuerdo con el flujo de la correlación de fuerzas. Es polivalente en la medida en que se presenta en varias circunstancias, niega lo estático, lo dual o lo permanente y prioriza lo multiescalar y sus matices. Así las cosas, la movilización pasa de estar limitada a las tensiones entre corteros y agro empresarios locales, a involucrar fenómenos nacionales y globales.

En primer lugar, en el año 2012 estalló el conflicto obrero-patronal en el Ingenio la Cabaña - ubicado en el municipio de Guachené, Departamento del Cauca- entre corteros de caña, especialmente los afiliados a SINTRAINAGRO, y los representantes de la empresa. El ingenio la Cabaña y las Sociedades Anónimas Simplificadas SAS -Servicios Agrícolas Cañafuerte SAS, Cañacort Dyb SAS, Servicios Agrícolas Agricosecha SAS, Corteagro SAS, Agropecuaria El Cañaveral Gama SAS, Agropecuaria García Y Martínez y AGROGAMA SAS-, han promovido la tercerización laboral de los corteros de caña. De ahí que, en diciembre de 2012 despidieron a 112 corteros de caña, miembros de SINTRAINAGRO, después de que el sindicato radicara el 14 de diciembre de 2012 -en el Ministerio del Trabajo- Pliego de Peticiones. Figuraban en la lista de despedidos el presidente de SINTRAINAGRO seccional Cabaña, el señor Mauricio Ramos García, quien había ejercido labores en el ingenio durante siete años y cuatro meses (SINTRAINAGRO, 2017), despedido por la SAS Cañacort D&B SAS, y quien aún no ha sido reintegrado a su puesto de trabajo hasta el día de hoy.

Asimismo, los corteros de caña exigían contratación directa y que los contratos se celebraran a término indefinido, sumado a que el ingenio garantizara la estabilidad de los trabajadores y la creación del comité obrero-patronal, para regular el equipo que aplicaría sanciones y despidos con justa causa. Adicionalmente el pliego de peticiones, que el sindicato pretendía elevar a convención colectiva, planteaba que, por un lado, el ingenio debía pagar \$7.800 pesos por tonelada de caña cortada y que dicho precio se tendría que tener como referencia para otras modalidades de caña, sin incluir dominical y recargos festivos, y por otro lado, se establecían categorías salariales: para monitor: \$ 1.800.000, para brechero: \$1.500.000, para oficios varios: \$1.400.000 y para corteros de caña: \$800.000 pesos (SINTRAINAGRO, 2012).

Después de que el ingenio y las tercerizadoras no quisieron negociar el pliego de peticiones e incumplieron la normatividad laboral vigente, el 20 de junio de 2013 SINTRAINAGRO dirigió una querrela administrativa laboral -ante el Ministerio del Trabajo- en la ciudad de Bogotá. En ella, expusieron cómo el ingenio la Cabaña implementó estrategias de contratación con Sociedades Anónimas Simplificadas, es decir, tercerizó el servicio de los trabajadores desconociendo la normatividad vigente respecto de actividades misionales permanentes, como el corte de la caña (Ley 1429 de 2010, Decreto 2025 de 2011 y Circular 055 de 2011 del Ministerio de la Protección Social). El documento de querrela planteaba que:

De tiempo atrás, los procesos de tercerización se hacen en el Ingenio La Cabaña, a través de Cooperativas de Trabajo Asociado, pero con el nuevo marco regulatorio estas cooperativas mutaron a SAS, para continuar con los procesos de tercerización de la mano de obra de las actividades misionales y permanentes. (SINTRAINAGRO, 2013, p.2).

El Ingenio la Cabaña incurrió en al menos tres actividades prohibidas por la Constitución Política de Colombia, por la legislación en materia laboral y por los convenios internacionales firmados por el Estado Colombiano con la OIT. En primer lugar, negativa a la libertad sindical y a la negociación de la convención colectiva, la vulneración del derecho al trabajo por persecución sindical, y por último, tercerización laboral en actividades misionales permanentes. Por ende, existen nuevas formas sobre las cuales se erige la producción de caña de azúcar, basadas en una configuración socio técnica que, por un lado, quiere seguir violando la legislación del código sustantivo del trabajo y la normatividad, frente a la tercerización, y por otro, sigue produciendo dinámicas conflictivas entre empresarios, contratistas o intermediarios, empresarios de ASOCAÑA, gobierno y corteros sindicalizados.

La nueva máscara de los contratistas o intermediarios, quienes se encargan de ejecutar la tercerización usando la nueva figura de SAS, es repelida por SINTRAINAGRO en la querrela interpuesta en el año 2013. A propósito, la Procuraduría General de la Nación planteó que:

A raíz del Decreto 2025 de 2011, se han denunciado casos donde los dueños de CTA han conformado sociedades anónimas simplificadas para seguir realizando intermediación laboral a través de estas últimas. Esto demuestra que el flagelo de la utilización abusiva de formas de contratación para vulnerar los derechos de los trabajadores, no se combate únicamente con reformas normativas, sino ante todo con un sistema de inspección, vigilancia y control fuerte. Por tal razón es necesario que el grupo de inspectores especializado en el tema de utilización abusiva de formas de contratación vigile con lupa las políticas de contratación de las terceras empresas, para determinar fácilmente, a través de la realización de auditorías ágiles, cuando las funciones misionales permanentes no están siendo realizadas por personal vinculado a través de contratos de trabajo. (Procuraduría, 2017, p.271).

En el Ingenio La Cabaña, la transición de la tercerización por medio de CTA a SAS, se hizo a través de la SAS Benigna Duque Botero, Hawer García Orjuela y Omar Toro, quienes, en el año 2010, 2012 y 2013 respectivamente, mutaron de CTA a SAS (SINTRAINAGRO, 2013).

Las SAS a través de las cuales se tercerizan las actividades misionales y permanentes del Ingenio La Cabaña, pertenecen a las personas que en la práctica son los que enganchan a los trabajadores con el ingenio. La sociedad agropecuaria Cañaveral Gama S.A.S y la sociedad Agropecuaria García Martínez SAS, le pertenecen al señor Hawer García Orjuela. El señor Omar Toro, CORTEAGRO SAS, quien cumple funciones de enganche de trabajadores, es el representante de la sociedad CORTEAGRO SAS. Igualmente, la señora Benigna Duque, promueve la tercerización laboral en el ingenio La Cabaña a través de otras empresas (LTDA, CTA o SAS) desde hace más de 17 años (SINTRAINAGRO, 2013).

Pese a la organización que han tenido los corteros al interior del sindicato, ni el ingenio La Cabaña, ni las SAS, ni las instituciones estatales encargadas de vigilar y sancionar (Ministerio de

Trabajo) han dado resultados concretos. Por ello SINTRAINGRO en el año 2016 solicitó a la Viceministra de Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio del Trabajo un poder preferente en el cual argumentaban que:

La anterior solicitud se fundamenta en el incumplimiento estructural de los términos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) para definir la responsabilidad de la empresa Ingenio La Cabaña y sus contratistas con ocasión al escenario de intermediación laboral ilegal que denunciábamos desde el pasado 4 de junio de 2013.

La falta de debida diligencia del Ministerio del Trabajo en esta y otras querellas presentadas por nuestro sindicato, ante la Dirección Territorial del Cauca, han generado no solo la afectación de nuestros derechos de asociación sindical y negociación colectiva, sino también una violación directa de nuestro derecho de acceso a la justicia. (SINTRAINAGRO, 2016, p.1).

Sumado a ello, el 16 de mayo de 2016, SINTRAINAGRO y la Central de Trabajadores de Colombia (CUT), elevaron una queja contra el Estado colombiano por la violación al capítulo 17 del TLC entre Estados Unidos y Colombia. Se denunciaba que no se cumplía con el artículo 17.2.1 del TLC, el cual obliga al Estado Colombiano a “adoptar y mantener en sus estatutos y regulaciones y prácticas en virtud de los derechos establecidos en la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y siguientes (1998) (Declaración de la OIT): (a) libertad de asociación; (b) el efectivo reconocimiento del derecho de la negociación colectiva”. (TLC, 2012, p.1).

Por tanto, los compromisos internacionales del Estado Colombiano para la firma del TLC con Estados Unidos han sido una herramienta jurídica en defensa de las condiciones de los corteros de caña sindicalizados, fenómeno que se le suma al conflicto polivalente al interior de la reestructuración productiva de la agroindustria, en el marco del capitalismo contemporáneo.

No obstante, existe otra cara del conflicto polivalente que tiene que ver con la forma de proceder de otros ingenios azucareros como Manuelita, Incauca, Mayaguez, Castilla, Providencia, Pichichí y San Carlos, otra cara que muestra otro tipo de relación. Desde el año 2003, líderes de los corteros y empresarios del azúcar de ASOCAÑA, establecieron un diálogo en el marco de un foro citado por ASOCAÑA en el concejo de la ciudad de Santiago de Cali, capital del Valle del Cauca. Este foro tuvo como objetivo debatir, respecto del Área del Libre Comercio de las Américas (ALCA), en el cual, la posición de los empresarios del azúcar era el rechazo al ALCA, debido a que afectaba el mercado nacional de azúcar a partir de las desventajas competitivas que éste traía.

En ese momento, se inicia el reordenamiento de las alianzas, de las acciones colectivas y de la movilización, es decir, se configura un tipo de alianza entre empresarios y corteros contra las políticas neoliberales del gobierno de Santos, que dejaron en desventaja a los empresarios nacionales, frente al crecimiento de las importaciones de azúcar y etanol, de Estados Unidos y Brasil, sobre la base de unas condiciones de competencia desiguales: azúcar y etanol extranjero subsidiado y mecanismo de protección del azúcar -FEPA- debilitados.

Desafortunadamente en los últimos años, las políticas económicas del Gobierno Nacional y de algunos funcionarios, que de manera irresponsable han venido acabando con el empleo y el desarrollo social de los trabajadores, porque en vez de crear mecanismos de defensa y protección de la producción nacional, se han dedicado a imponer y defender las importaciones de azúcar a Colombia de otros países del mundo, aplicando sanciones a los empresarios azucareros de manera irresponsable, con el objetivo de acabar con la producción y exportación de azúcar de Colombia y acabar con el empleo de más de 750.000 trabajadores y sus familias, que económicamente dependen de estos ingenios azucareros. Además, que han asumido un papel importante haciendo obras sociales en materia de vivienda, educación, salud, cultura, recreación y deportes, que es una responsabilidad del Estado y con estas políticas que el Gobierno ha venido imponiendo en el sector azucarero, va a ser imposible seguir apoyando este desarrollo social en esta región del país. (SINTRAINAGRO, 2016).

En marzo del 2016 se realizó el “Encuentro por la vigencia de la producción y el trabajo en el sector azucarero y panelero” en el Valle del Cauca, en el cual participaron el senador del Polo

Democrático Jorge Enrique Robledo, Jairo Saavedra vicepresidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Rel-Uita, en el marco de la cuarta misión a Colombia en defensa del sector azucarero y panelero, Procaña y estudiantes de la Universidad del Valle. En dicho encuentro, el sindicalista Saavedra expuso que “el hecho de que los sindicatos trabajen en conjunto con empresarios del sector, no quiere decir que se hayan plegado a las exigencias del capital, sino que operan en defensa de un patrimonio común, de una región que sin el sector azucarero va a sucumbir” (SINTRAINAGRO, 2016).

Lo interesante en esta relación y como ya fue señalado es que, en el año 2003, 2005 y 2008 los corteros de caña protagonizaron paros, en donde, en el caso del paro de año 2008, el 75% de la producción de azúcar del Valle del Cauca fue parada (A, Tigreros, comunicación personal, junio, 18, 2017). Después, en el año 2015, el gobierno de Juan Manuel Santos planteó la reducción del FEPA con el propósito de reducir el 100% de arancel establecido para las importaciones, con la intención de favorecer las importaciones de azúcar y etanol. En consecuencia, se presentó nuevamente un diálogo entre empresarios y corteros de caña para trazar estrategias frente a la negociación que los empresarios debían adelantar con el gobierno. Lo que lograron negociar los empresarios fue un 75% de arancel a las importaciones. La líder sindical María Duque, respecto a las críticas que ha recibido el sindicato por establecer alianzas con los empresarios, expone que:

Es una patraña, algo muy retorcido. Tratar de desvirtuar el interés legítimo de los trabajadores en defender su empleo. Es como poner a los trabajadores en la picota pública, pretendiendo que la gente los vea como unos vendidos. Quieren desprestigiarlos y desmotivarlos, bajándoles la moral para que ya no defiendan sus intereses. Al mismo tiempo, usan esto para crear un ambiente muy desfavorable a la producción azucarera. Recientemente leí un artículo de un docente de la Universidad de Los Andes, que hacía énfasis en la ausencia de teoría y método de análisis cuando se trata el tema de la producción azucarera. El artículo señalaba el uso de la campaña mediática para ocultar esta falta de análisis y metodología, y para ir creando en la opinión pública nacional una opinión adversa al sector azucarero y a quienes defienden el empleo que genera. Todo esto es muy lesivo de los intereses nacionales. Definitivamente, aquí no están en riesgo

solamente los puestos de trabajo, que por cierto son muy importantes, sino la soberanía y seguridad alimentaria de Colombia. (M, Duque, entrevista junio, 10, 2017).

Resulta relevante retomar el argumento de Machado quien plantea que es ingenuo defender la política de apertura de mercados, sin considerar el dominio que ejercen los países desarrollados sobre los circuitos agroindustriales y sobre los mercados mismos, sumado a ello, los subsidios a la producción importada, los cuales no serán desmontados (Machado, 2000). Bajo la lógica de los organismos internacionales, los países en desarrollo deben desmontar los subsidios debido a que distorsionan la formación de precios, mientras los países industrializados, que sí saben de la importancia de la agricultura, fortalecen los subsidios (Machado, 2000). Es decir, “La apertura termina siendo de una sola vía y los perdedores los países en desarrollo”. (Machado, 2000, p.280).

Así pues, la nueva estrategia de movilización de SINTRAINAGRO tiene que ver con establecer alianzas con los empresarios de ASOCAÑA mediante reuniones, foros, y movilizaciones conjuntas, como es el caso de las movilizaciones realizadas conjuntamente en Cali y Palmira en el año 2016. Entonces, el “Encuentro por la Vigencia de la Producción y el Trabajo en el sector Azucarero y Panelero” en donde, además de reunir a todas las centrales obreras del país y de contar con el apoyo de la Rel-UITA, asistieron representantes de ASOCAÑA y PROCAÑA (A, Tigreiros, comunicación personal, junio, 18, 2017), se convirtió en un escenario de articulación y definición de estrategias conjuntas. Es decir, este encuentro trazó un hito importante para la relación entre las dos partes. Los líderes sindicales de SINTRAINAGRO plantean que la alianza “va para largo porque el gobierno está empeñado en joderlos, ellos lo tienen perfectamente claro, ahora están con el tema del etanol” (A, Tigreiros, comunicación personal, junio, 18, 2017).

Por otro lado, Colombia cuenta con 230.000 hectáreas de caña que produjeron 2.233.831 toneladas de azúcar en el año 2017, según el balance del FEPA, y según el dirigente sindical

Jhonson Torres, entre 1,6 y 1,8 millones de toneladas son destinadas al mercado nacional. Ello indica que, a Colombia le sobra alrededor de 700.000 a 800.000 toneladas de azúcar al año (J, Torres, comunicación personal, junio, 17, 2017), ya que los ingenios azucareros no pueden producir menor cantidad, debido a que su capacidad instalada no lo permite, es decir, serían los mismos costos laborales si produjeran 50.000, 100.000 o 300.000 toneladas menos.

En conclusión, el escenario de oportunidad política que brinda el balance de implementación del plan de trabajo del TLC es un punto de partida para la acción colectiva de diferentes actores de la agroindustria de caña de azúcar en el Valle del Cauca. RECALCA planteó que es necesario que el Congreso de la República realice controles políticos a los resultados del TLC y que cree mecanismos técnicos de seguimiento a los mismos, sumado a que los gremios como la ANDI, ACOPI, PROINDUSTRIA, ASINFAR, ACOLFA, las centrales sindicales -CUT, CGT, CTC -, las organizaciones académicas, estudiantiles y campesinas, deben trabajar conjuntamente para proponer una política para la recuperación de la economía nacional en la agricultura e industria, como única alternativa para salir de la crisis actual (RECALCA, 2015).

Por lo anterior, tanto para los corteros de caña de SINTRAINAGRO como para los empresarios de la agroindustria de azúcar del Valle del Cauca, esta coyuntura les exige movilizar recursos para establecer oportunidades políticas en medio de la ya descrita restructuración productiva. No obstante, la alianza devela un carácter estratégico y coyuntural.

(...) Hay que entender que el trabajador existe mientras haya empresa, entonces, para que pueda existir la contradicción y la pelea, pues, tiene que existir la empresa. Entonces hay una contradicción principal y una contradicción secundaria, entonces la contradicción principal en estos momentos es que van a acabar con los puestos de trabajo y con la empresa. Y esa contradicción principal está por encima de la contradicción entre capital y trabajo que es una contradicción antagónica, y entonces hay que saberla llevar, porque no queremos que cierren las empresas. (J, Torres, comunicación personal, junio, 17, 2017).

Al analizar el comportamiento de la producción tanto de caña, de azúcar y de etanol en Colombia surgen elementos de envergadura para entender estas alianzas. Desde octubre del año 2005, se produce en Colombia etanol, y según el balance realizado por ASOCAÑA, la primera producción fue de 27.034 litros de etanol y cero litros importados. En 2006 se produjeron 265.684 litros y cero litros importados. En el año 2008 se produjeron 255.584 litros (cero importaciones), en el año 2009 fueron 327.705 litros (cero importaciones). Sin embargo, en el año 2010 la producción cayó a 291.286 litros (cero importaciones). El último balance del año 2017 actualizado en marzo de 2018 por el FEPA, habla de 366.753 litros de etanol (71.382 litros importados) respecto a un consumo nacional de 361.533 litros. Es decir, son 71.382 litros de sobreproducción nacional.

Dos años después de que Biden enviara la carta a Santos en el año 2014, en la cual le exigía al presidente colombiano respetar los acuerdos establecidos, no sólo fueron sancionados por la SIC varios ingenios azucareros, sino que en el año 2016 se conoció que el Ministerio de Minas y Energía daría un aval a la importación de etanol proveniente de Estados Unidos. Lo que seguiría poniendo en riesgo a los productores nacionales, dado que para el año 2016 se producían en Colombia 456 millones de litros de alcohol carburante (etanol), mientras que Estados Unidos producía 123 veces más, es decir, 56 mil millones de barriles subsidiados por Colombia (RCN Radio, 2016).

Por estas razones, SINTRAINAGRO ha realizado diversas acciones colectivas como foros, movilizaciones, derechos de petición, tutelas, querellas, en las cuales los puntos centrales han sido la defensa de los puestos de trabajo en los ingenios azucareros; el respeto por sus derechos laborales, pero también el respeto por la producción nacional. De ahí que, Jhonson Torres, plantee

que “las contradicciones no se zanjaron, pero si se acaba la empresa se acaba el trabajo” (comunicación personal, junio, 17, 2017).

En el ingenio Castilla, el 4 de abril de 2016 se logró la convención colectiva de trabajo, suscrita entre SINTRAINAGRO y el ingenio, en la cual se establecieron los acuerdos de arreglo directo entre las partes. Reconocimiento sindical, estabilidad laboral, comité obrero patronal, prescripción de las llamadas de atención, comisión de reclamos, jornada laboral, entre otras, fueron los puntos acordados en dicha convención. “Acogiendo el principio de estabilidad, la empresa CASTILLA COSECHA S.A mantendrá la modalidad de contrato laboral a término indefinido para quienes ya se vincularon en la iniciación de la compañía” (Convención Colectiva La Castilla Cosecha, 2016, p.6).

En conclusión, mientras en algunos ingenios se establecen relaciones conflictivas que se manifiestan en despidos colectivos, violaciones de las normas laborales y derechos del trabajador como es el caso de La Cabaña, en otros, se afianza un escenario de negociación, articulación y coordinación entre corteros de caña y empresarios, estableciendo convenciones colectivas y generando escenarios de articulación para definir repertorios de acción colectiva, como lo fue el foro por la defensa del azúcar y la panela y la movilización conjunta en Palmira y Cali contra el TLC. En este sentido, se afianza el conflicto polivalente entre corteros de caña y empresarios del azúcar. A continuación, se explicará cómo la regulación en materia laboral fue una estrategia para fomentar el TLC entre Estados Unidos y Colombia.

6. La interconexión entre los ajustes en materia laboral y la movilización de corteros de caña en el escenario de la agroindustria azucarera

En este capítulo se analizan los cambios en la legislación laboral colombiana, su estrecha relación con el concepto de reestructuración productiva y los efectos en la movilización de corteros de caña del Valle del Cauca. Figuras como las EAT, las CTA y la SAS en la agroindustria azucarera, el Acuerdo de Promoción Comercial (APC) entre Estados Unidos y Colombia, el CONPES 3510 del 2008 y la ley 1429 de 2010, son algunos de los mecanismos mediante los cuales se ha realizado la reestructuración productiva en la agroindustria azucarera. Por ello, reestructuración productiva, cambios en la legislación y movilización de corteros, son fenómenos que no se pueden abordar de manera separada.

Una explicación clara sobre el proceso de transformación de las relaciones laborales en 1980 en Colombia -es decir lo que llamo reestructuración productiva- en el contexto de los ajustes estructurales que respondieron a la apertura colombiana a la economía global, es planteado por Vallejo (2016). Citando a Corchuelo (1993) explica el proceso de racionalización en el uso del factor trabajo “que debió tocar las bases de las antiguas formas de organización”. Al respecto Corchuelo (1993) plantea,

Estas transformaciones pueden verse como un elemento más de un proceso de reestructuración industrial que operó en la década del ochenta en el campo tecnológico y en la organización de la producción y del trabajo de las empresas industriales. De manera silenciosa, opacada por la recesión económica, esta “reestructuración industrial” afectó distintos tipos de relaciones – técnicas, sociales, económicas- y, particularmente, un conjunto de instituciones laborales consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo (CST) colombiano. (p.43).

Posteriormente, se produce una reforma laboral en 1990 con la ley 50 la cual significó una respuesta al conjunto de transformaciones de las relaciones laborales que venían operando desde

1980 y que había otorgado flexibilidad a los mercados de trabajo. Entonces, por un lado, hubo modificación en la legislación laboral, y por otro, cambios en la organización de la producción y del trabajo, en la tecnología utilizada y en las relaciones laborales. (Vallejo, 2016, p.29).

En consecuencia, comienza un auge del contrato a término fijo -empleo temporal donde las agencias de servicios temporales van a tener un papel importante como intermediarias y bolsas de empleo-, aumentando el desempleo en el sector industrial (Vallejo, 2016).

Así las cosas, el origen de las SAS en el escenario laboral de la agroindustria de caña está asociado a las EAT y las CTA. Las EAT, que surgieron en 1991, consistían en la asociación de no más de 20 personas que aportaban su capacidad productiva para la constitución de un capital semilla empresarial. Posteriormente en la primera década del siglo XXI se reemplazó a las EAT y a los contratos sindicales por la figura de CTA, lo que generó un debilitamiento en las condiciones laborales -salud, vivienda, educación- de los corteros de caña, y la volatilidad de los empleos en el sentido de inexistencia de contratos de trabajo regulados por el código sustantivo del trabajo, que protegieran los derechos laborales y sindicales, e inseguridad laboral y pago al destajo. En consecuencia, por un lado, se redujeron los costos laborales para los empresarios de la caña de azúcar (Urrea, 2007) y por otro, se fortaleció la organización de los corteros en sindicatos, proceso que tomaría múltiples facetas.

En las sentencias T-401 de 2008 y T-513 de 2010 “la Corte Constitucional ha obligado a los terceros que fungían de usuarios de CTA asumir las obligaciones derivadas de la existencia de un contrato de trabajo en favor de personas que antes habían sido vinculados como trabajadores cooperados” (Procuraduría, 2017, p.127). En el estudio realizado por La Procuraduría, se plantea que el factor que explica la proliferación de dichas formas de tercerización, está asociado a las

dificultades que experimentaron los empresarios en la recesión de finales del siglo XX, fenómeno que los llevó asumir estrategias de crecimiento trasladando los riesgos de eventuales ajustes a terceros. A saber, “este aprendizaje posterior a la crisis explicaría el auge de los procesos de tercerización” (Procuraduría, 2017, p.127), lo que también explicaría la reestructuración productiva en la agroindustria azucarera.

Como ya se mencionó, Estados Unidos exigió al gobierno Colombiano la regulación de las CTA para la firma del TLC, con el propósito de incrementar costos laborales a los empresarios nacionales, generando así un escenario positivo para la importación de materias primas por parte de los Estados Unidos, a lo que se le sumó las exigencias de los corteros de caña en la misma vía de regulación de la figura de la CTA. Gracias a estos dos procesos, se creó el artículo 63 de la ley 1429 de 2010, el cual representó una novedad para el sector privado ya que implicaba que aquellas personas que venían siendo contratadas por alguna de las modalidades no laborales -anteriormente mencionadas- para cargos misionales con vocación permanente, pudieran acudir a la jurisdicción laboral, a partir del año 2013, para el reconocimiento de un contrato de trabajo. Así las cosas, ni las CTA, ni las SAS podrían suplir cargos misionales de vocación permanente una vez entrara en vigencia dicha ley (Procuraduría, 2017).

La reestructuración productiva en gran parte implementada con las CTA, según Fernando Urrea (2007) “se refiere a toda una serie de procesos en los que se buscaba, en términos operacionales y de organización del trabajo, un aumento de la rentabilidad y la eficiencia de las actividades de la empresa” (p.149). La reestructuración productiva se apoya de un proceso paulatino de tercerización y precarización laboral y de la reducción de la carga prestacional en las labores del campo y de la ciudad, siendo las rurales las primeras afectadas (Urrea, 2007).

Farne (2008), explica la proliferación de las CTA en Colombia a partir de cinco procesos: el clientelismo y la corrupción política; el impulso que recibieron en el sector salud; los bajos costos laborales -que implica su implementación- y las ventajas de outsourcing. El efecto de la proliferación de CTA en Colombia tiene que ver con el desmejoramiento de las condiciones de trabajo de los corteros de caña, pero también y de una manera inimaginable, con el aumento de la sindicalización posterior al año 2008.

Aunque las sentencias de la Corte Constitucional regularon las figuras de intermediación, prohibiendo la contratación de oficios misionales, la tercerización continuó. Es el caso del Ingenio La Cabaña, en donde se presentó el conflicto entre las SAS y los corteros sindicalizados. Luego del despido masivo de más de un centenar de corteros de caña en el año 2012 en el Ingenio La Cabaña, la SAS Benigna Duque y Hawer García reintegraron parcialmente corteros que habían sido despedidos. Sin embargo, la tercerización mediante SAS no cesó, lo que produjo la ratificación de la queja contra el ingenio La Cabaña ante el Ministerio de Trabajo en la ciudad de Santander de Quilichao. También, el 20 de julio de 2013 fue interpuesta una querrela administrativa laboral, por parte de los corteros de caña en la ciudad de Bogotá, en donde denunciaron la tercerización laboral.

El 2 de abril de 2013 se radicó un derecho de petición dirigido a los contratistas y al ingenio la Cabaña solicitando el reintegro laboral de los corteros despedidos, a lo que respondieron de manera negativa Corteagro, Hawer García, Agropecuaria García y Martínez SAS, Servicios Agrícolas agricosecha SAS e ingenio La Cabaña. El 14 de mayo de 2013 el sindicato interpuso una tutela contra dichas tercerizadoras y el 28 de diciembre del mismo año SINTRAINAGRO, presentó ante la inspección del Ministerio del Trabajo otra querrela administrativa contra el ingenio y sus contratistas. En el año 2015 el Ministerio del Trabajo informó que la propuesta de formalización

laboral presentada por el sindicato había sido remitida al director de la territorial del departamento del Cauca, es decir, el proceso fue dilatado.

Así las cosas, la implementación de las figuras de intermediación produjeron el incremento de la sindicalización de los trabajadores rurales de la caña de azúcar después de las jornadas de movilización del 2008 en el Valle del Cauca, siendo esto algo contradictorio a su naturaleza, debido a que estos mecanismos -EAT, CTA, SAS- fueron diseñados para desarticular la sindicalización de los trabajadores, debido a que no se regulaban bajo el Código Sustantivo del Trabajo, en materia de sindicalización, lo que en esencia significaba el no derecho a la huelga. Esto se explica teniendo en cuenta el llamado a la sindicalización que realizaron los corteros de caña en el año 2008, logrando así, según el dirigente sindical Tigreros, un aumento de la sindicalización y un fortalecimiento de los sindicatos como es el caso de SINTRAINAGRO.

Así pues, la regulación de estas figuras lejos de ser un fenómeno motivado por la necesidad de garantizar condiciones dignas y derechos de organización sindical a los trabajadores de los ingenios, representa una estrategia que busca dar beneficios a la incursión de capital extranjero para la producción de etanol. Urrea (2003), plantea que este fenómeno de las CTA “en la medida en que carezca de regulación e importantes controles puede chocar con los intereses de otros países interesados en evitar una competencia basada en bajos costos laborales” (p.119). Y más aún, “la presión demócrata en los EEUU va a ser muy insidiosa en el asunto de la aplicación de la normatividad laboral legal en la región” (Urrea, 2003, p.119).

De ahí que, el gobierno colombiano haya regulado las CTA de acuerdo con el flujo de intereses en el escenario económico internacional, sin embargo, no las ha desaparecido, debido a que éstas hacen parte del escenario natural de la reestructuración productiva (Urrea, 2003). En este caso, al

contrario de lo que se piensa con la puesta en marcha del TLC, sobre la desregulación estatal en el contexto de la caña de azúcar, la regulación es un efecto del Tratados de Libre Comercio para que las empresas trasnacionales no compitan con empresarios colombianos aventajados por los bajos costos laborales en la producción de caña y alcohol carburante. Por esta razón, el Estado ha regulado recientemente las figuras de intermediación laboral.

A propósito, Urrea (2007) planteó que, se vivía un importante cambio político iniciando el nuevo siglo, con un congreso de mayoría demócrata en Estado Unidos, lo que implicaría que las normas laborales colombianas y los acuerdos internacionales asumidos por el Estado, serían revisados de manera más acuciosa para definir el horizonte del TLC con Colombia.

Sin embargo, y como ya fue explicado -en el segundo capítulo- el sindicato SINTRAINAGRO estableció alianzas con el sector empresarial nacional en el contexto de la reestructuración productiva, arguyendo la defensa de la producción colombiana de azúcar y en contraposición a la entrada de capital extranjero. Al respecto el dirigente sindical Tigreros plantea que:

En el 2015 el gobierno nacional emitió un proyecto de decreto donde expresaba que modificaba la franja andina de aranceles, que es lo que rige en el sector azucarero. El sector tiene dos mecanismos de protección: la franja andina de aranceles con un arancel mínimo del 115% en el 2015, y eso dependía de cómo estuviera el peso del azúcar en el mercado mundial. El gobierno saca ese proyecto diciendo, que lo bajaba al cuarenta por ciento, y en tres años al cero e igualmente en el proceso de las multas de la investigación de la superintendencia de industria y comercio hubo un fallo de la súper industria multando a los ingenios. Lo que no dijeron los medios era que el fallo tenía dos cosas, la multa, y el más grave, que en seis meses desaparecería el FEPA, que es el fondo que maneja el mercado nacional, lo manejan los ingenios y está adscrito al Ministerio de Agricultura. El ministerio le dio el manejo del fondo a los ingenios que es lo lógico, porque los ingenios son los que hacen el azúcar. (A, Tigreros, entrevista, junio, 18, 2017).

Sumado a ello, y como efecto de la reestructuración productiva la SIC estableció un periodo de seis meses para la desaparición del FEPA, lo que significaba que las trasnacionales no pagarían impuestos para ingresar azúcar y etanol a Colombia. En dichas circunstancias, la agroindustria

azucarera colombiana desaparecería, y con ella desaparecerían miles de puestos de trabajo, tanto de corteros como de trabajadores de fábrica, operarios de aseo y administrativos.

El efecto que produjo en SINTRAINAGRO este escenario ya fue descrito en el capítulo dos, sin embargo, es importante retomar los escenarios de articulación entre el sindicato y el gremio de empresarios, los cuales son producto de la estrategia de movilización de recursos de la organización sindical.

Se hizo un foro en el consejo de Cali y ASOCAÑA participó y fijó la posición pública de que el libre comercio afectaba la agroindustria porque con un arancel cero quedaba a merced del mercado del azúcar. Entonces íbamos a depender exclusivamente de Brasil y Brasil queda aquí cerquítica, o sea que nos pueden mandar todo el azúcar que quieran. Brasil hoy está produciendo casi 40 millones de toneladas de azúcar y solamente se consume 9 millones de toneladas, entonces quedan más de treinta millones de toneladas que tienen que exportar. Por ello estuvimos en el evento y los sindicatos organizamos un comité con los sindicatos patronales y la CUT, porque ahí no nos podemos poner a diferenciar. Está en peligro los puestos de trabajo de todos, incluidos los de los dirigentes sindicales, incluidos los de los funcionarios de los ingenios, y con un agravante para la población. Hicimos contacto con los alcaldes, con los concejales y con sociedad civil hicimos dos grandes movilizaciones, una en Palmira y otra en Cali. Paralizamos todo el transporte ese día y luego aquí en Cali movilizaciones de 15 o 20 mil personas más o menos. (...) También se hicieron dos foros con participación de parlamentarios, trajimos también gente de Costa Rica, Uruguay, entonces eso obligó al gobierno a sentarse a negociar pero negociaron los empresarios solos, ahí si no se acordaron de nosotros para llevarnos a la negociación. (...) Todos los documentos y la organización la hicimos nosotros, SINTRAINAGRO. Entonces ellos reconocen que nosotros los salvamos en las movilizaciones por los pronunciamientos bien orientados y concretos del tema con un conocimiento profundo sobre el tema de la agroindustria y cómo funciona el mercado y el negocio. Hay buenas relaciones con algunos empresarios, no con todos porque hay algunos ahí que son hijueputas. Hoy han cambiado por fuerza de las circunstancias, el gobierno está empeñado en acabarlos. Esa es la cruda realidad. El gobierno está empeñado en entrar a la OCDE y está haciendo todos los esfuerzos para entrar. Y uno de los requisitos de la OCDE es cero aranceles para los productos agropecuarios incluidos el azúcar. (A, Tigreros, entrevista, junio, 18, 2017).

De acuerdo con las declaraciones del líder sindical vemos que el conflicto no es de doble cara como ya se explicó anteriormente, sino que tiene múltiples facetas, es decir, es un conflicto polivalente. Agrega que “la ayuda mutua va para largo porque el gobierno está empeñado en

joderlos, ellos lo tienen perfectamente claro, ahora están con el tema del etanol. El gobierno aprobó la libre importación del etanol, es que la presión de los gringos es tenaz” (A, Tigreros, entrevista, junio, 18, 2017).

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, teniendo en cuenta que ASOCAÑA se encontraba en férrea oposición al libre mercado, estableció beneficios a los empresarios de la agroindustria con el propósito de fortalecer la producción de agrocombustibles, creando las condiciones para que la agroindustria incursionara en el negocio del etanol valiéndose de la inversión de los empresarios en esta materia como pago de impuestos. Adicionalmente, dicha maniobra política de Álvaro Uribe Vélez tuvo que ver con que los empresarios de la agroindustria no se opusieran a la firma del TLC, ya que estos habían manifestado lo desfavorable que resultaría el tratado para la agroindustria colombiana.

7. Conclusiones

El presente trabajo se centró en las transformaciones de las prácticas y discursos en la movilización laboral de los corteros de caña miembros de SINTRAINAGRO posterior al año 2008. Se sostuvo a lo largo del trabajo que, por un lado, luego de la crisis del capitalismo y la incursión del etanol en los primeros años del siglo XXI, las prácticas y discursos de movilización tomaron un nuevo giro, y en segundo lugar, posterior al año 2008, el conflicto dejó de ser dicotómico y pasó a ser un conflicto polivalente. Es decir, se consolidó un nuevo conflicto dotado de más de dos aplicaciones superando la vieja tradición de los conflictos obrero patronal en donde la única contradicción que se debía saldar era la del patrón y el obrero. En este nuevo conflicto polivalente, el cual estima muchas maneras de vivir las tensiones y conflictos entre corteros de caña y empresarios de la caña, para el caso de la agroindustria azucarera analizaron dos casos concretos:

el conflicto en el Ingenio la Cabaña entre el sindicato, el Ingenio y las tercerizadoras, y las relaciones laborales caracterizadas por la coordinación de estrategias de acción colectiva conjuntas entre sindicato y empresarios de los Ingenios Manuelita, Incauca, Mayaguez, Castilla, Providencia, Pichichí y San Carlos.

En el primer aspecto se pudo constatar cómo la tercerización laboral que históricamente han querido implementar los empresarios dueños de los Ingenios, lejos de alejar las posibilidades de organización sindical de los corteros, lo que terminó causando fue el incremento de la sindicalización y la movilización de recursos con redes nacionales e internacionales que permitieron llevar la confrontación obrero patronal a escenarios jurídicos internacionales. Es decir, denunciar nacional e internacionalmente, cómo el Estado colombiano incumplió sus compromisos de protección a los trabajadores y de garantizar su derecho a la sindicalización. Lo anterior no sólo se expresó en el conflicto presentado en el Ingenio la Cabaña sino también en el contexto de la creación de las CTA en donde los corteros también consolidaron sindicatos.

En el segundo caso, la reestructuración productiva del sistema agroindustrial permitió que las relaciones laborales entre corteros de caña y empresarios se desarrollara en un ambiente más o menos estable. Se establecieron alianzas circunstanciales entre corteros de caña y empresarios con el fin de realizar acciones colectivas conjuntas contra la consolidación del etanol y del azúcar extranjero en Colombia.

Estos dos elementos, indican que las visiones que reducen los conflictos obrero- patronales a una visión dicotómica son reducidas, y no permiten ver otros elementos que dentro de aquel conflicto se producen. La teoría de sistema agroindustrial ayuda a comprender que existe una transformación compleja de los procesos productivos, de las relaciones laborales, de la base socio

técnica y de la cultura laboral que hacen que nuevos actores aparezcan - como el etanol- y que los que ya existían tengan que transformarse de acuerdo con las circunstancias.

Esta teoría ayuda a comprender también las conexiones que existen entre el sistema agroindustrial global con contextos locales en donde se desarrollan enclaves agroindustriales. Es decir, estas dinámicas conflictivas internas se ubican en un escenario global que determina las condiciones en que se da la reestructuración productiva capitalista. Por esta razón, es sumamente atractiva la idea de que los corteros de caña luchen contra la transnacionalización, contra el debilitamiento de la economía nacional, contra la importación de materia prima y contra el desplome de sus garantías laborales, usando como herramientas de defensa las mismas otorgadas por el neoliberalismo y de la transnacionalización como lo es, las disposiciones laborales contenidas en el plan de acción de TLC entre Estados Unidos y Colombia.

Por otro lado, la teoría de relaciones laborales y de reestructuración productiva son necesarias para entender que dicha reestructuración no sólo se da en el campo de la producción al interior de la fábrica consolidando la tecnificación en la producción sino, y especialmente, en las relaciones productivas, en la base socio técnica y en la cultura laboral misma de las relaciones laborales. Esto quiere decir que las múltiples variaciones en la legislación en materia laboral en Colombia están estrechamente relacionadas con la reestructuración productiva que se da en el escenario del sistema agroindustrial. Empero, en ciertos periodos de tiempo la regulación estatal en materia laboral ha sido proclive a la creación de tercerizadoras y en otros periodos ha tendido a su regulación.

Así las cosas, la precarización explicada por De la Garza y por Standing en el marco del capitalismo neoliberal ha sido positivo para unos pocos, no solo en las sociedades europeas que analiza Standing sino también en países como India, Malasia, Colombia, Perú, etc., es decir, en

aquellos países del sur global donde se implementan diversas formas de explotación, acaparamiento de tierras, precarización laboral, desregulación de las relaciones y precarización laborales. En el nuevo escenario de los agrocombustibles se busca que los países pobres se conviertan en grandes aldeas de miles de hectáreas concentradas en manos de especuladores y de empresas privadas para el monocultivo de caña, palma africana, soja, etc., ello con el beneplácito de los estados.

Así pues, los Tratados de Libre Comercio implementan dispositivos que configuran tecno regiones en el sentido de Fals Borda adecuadas con sumo cuidado para la reproducción del sistema agroindustrial que busca seguir generando energía para la reproducción del capitalismo global. Por ello, las movilizaciones de los sindicatos son molestas para los propósitos de las corporaciones, sin embargo, los sindicatos aprendieron a moverse en el escenario de la reestructuración productiva y han logrado mantener, potenciar y aumentar la capacidad sindical. La resistencia de los grupos de presión que se movilizan contra las condiciones de precarización ha sido vital para la defensa de las experiencias locales en el marco de la explotación capitalista.

Dado lo anterior, es vital retomar la tesis de Machado que plantea que la penetración de las transnacionales modificó las formas de funcionamiento de la estructura agraria y alteró el esquema de la división social del trabajo entre la agricultura tras nacionalizada y la agricultura productora de alimentos primarios para el mercado interno, transformándose en cambios, en los mercados y en la consolidación de una fase de transnacionalización y del redespliegue agrícola e industrial y “en la implantación de una nueva división internacional del trabajo” (Machado, 2002, p. 64) En este contexto la tierra y la mano de obra forman parte de la economía de mercado, generando nuevas formas de concentración y poder (Machado, 2002).

Dicha adecuación de la estructura productiva consolidó el sistema capitalista agroindustrial reciente, reordenando su estructura productiva sin abandonar las viejas prácticas extractivas, las cuales transformó. La crisis financiera y alimentaria del capitalismo en los años 2006 y 2007 en donde se produjo una fuerte crisis financiera y alimentaria mundial, generando la necesidad urgente de estrategias de reordenamiento. Dicha crisis financiera y crisis de alimentos mundial - que lejos de significar la inexistencia de alimentos consistió en el acaparamiento de estos en manos de grandes corporaciones para la producción de nuevas fuentes renovables de energía - produjo medidas relacionadas con la extracción de energías sustitutas a las fósiles -el etanol y el biodiesel- , como forma de reproducir y de mantener firme el sistema capitalista agroindustrial. Es así, como los pactos corporativos transnacionales -que el capitalismo desarrolló y los cambios en los marcos regulatorios de los Estados- fueron otras de las estrategias para sostener el sistema en plenos tiempos de crisis. Evidentes situaciones de precariedad laboral, que se presentan en el escenario de la agroindustria azucarera del valle del Cauca, son la consecuencia palpable de las mal llamadas “energías renovables”.

Por ello, la transición del capitalismo agrario al capitalismo agroindustrial contemporáneo es impulsado por grandes corporaciones a nivel mundial y apropiado por los Estados mediante pactos corporativos o TLCs, facilitando las condiciones para la extracción de dichas materias primas: acaparamiento de tierras, mano de obra barata y relaciones laborales basadas en la precarización y flexibilización, entre otras. Lo anterior ha producido graves efectos, como la destrucción no solamente del medio ambiente, sino de las dinámicas sociales locales. De ahí, las demandas históricas de los corteros de caña en el Valle del Cauca, exigiendo cambios en las relaciones laborales basadas en la precariedad, explotación y flexibilización.

Dado lo anterior, es necesario concluir que la reestructuración capitalista mundial y su efecto en enclaves locales como el agroindustrial azucarero del Valle del Cauca son expresiones del neoextractivismo en el sentido de que el Estado ha coadyuvado a legitimar y beneficiar aquellos actores que viven de la renta extractiva privatizando los medios de producción y las empresas del Estado. Sumado a la (re)primarización de las economías nacionales, las reformas de los marcos regulatorios en materia laboral y la flexibilización de los controles ambientales y sociales, “todo para que la inversión extranjera acceda a fuerzas de trabajo y recursos estratégicos baratos”. (Hurtado, 2017, p.24). Estas nuevas condiciones de precarización en el mercado laboral y en las condiciones de producción, niegan la posibilidad de subsistencia de las economías locales, las cuales son absorbidas gracias a la reestructuración del capitalismo agroindustrial contemporáneo mediante los dispositivos implementados por el neoextractivismo.

Dado lo anterior, es necesario seguir trabajando en el análisis de estas experiencias para profundizar en el conocimiento de las relaciones que se dan en el capitalismo agroindustrial contemporáneo, con el propósito de encontrar alternativas que permitan transformar las históricas condiciones de explotación de los trabajadores y desarrollar estrategias de poder en el marco de las relaciones laborales configuradas en el sistema agroindustrial, que persigan el bienestar y el buen vivir de los trabajadores rurales y de los sindicatos. Por ello, la sociología puede ser un puente que permita coadyuvar a la definición de las estrategias de acción colectiva de los corteros de caña a partir del entendimiento de los procesos históricos y sociales, y a partir de la sistematización de experiencias organizativas para vislumbrar los éxitos y fracasos y poder aportar, desde allí, a la reorganización de marcos de acción colectiva para la superación de las viejas/nuevas condiciones de explotación, flexibilización y precarización laboral, sumado al fortalecimiento de la capacidad organizativa de los sindicatos.

Finalmente, quedan abiertas más posibilidades de investigación sobre este tema, entre las cuales sugiero el estudio de los marcos de acción colectiva de otros sindicatos como SINTRACAÑAZUCOL de la agroindustria azucarera vallecaucana, lo que permitiría profundizar el estudio de las transformaciones de las prácticas y discursos de la movilización laboral posterior al año 2008 en otros sindicatos, pero en el mismo contexto del capitalismo agroindustrial contemporáneo.

8. Referencias

- Agencia de Información Laboral – AIL. (2012, julio 13). *Este sábado se lanza en Cali el Consejo Laboral Afrocolombiano*. Recuperado en <http://ail.ens.org.co/noticias/este-sabado-se-lanza-cali-consejo-laboral-afrocolombiano/>
- Ámbito Jurídico. (2018, abril, 20). *ATENCIÓN: Por fallo del Consejo de Estado, derogan lineamientos sobre tercerización laboral*. Recuperado en <https://www.ambitojuridico.com/noticias/laboral/laboral-y-seguridad-social/atencion-por-fallo-del-consejo-de-estado-derogan>
- Archila, M. (2001). *Vida, Pasión y... de los movimientos sociales en Colombia*. En: Movimientos sociales, Estado y Democracia. Centro de Estudios Sociales. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. P. 16- 47.
- Arias H, C. (2017). *Neoextractivismo en América Latina y Colombia: una reflexión desde la ecología política*. Revista Controversia. Núm. 208. Recuperado en <https://www.revistacontroversia.com/index.php?journal=controversia&page=article&op=view&path%5B%5D=1083>
- Berrío, A. (2006). *La perspectiva de los nuevos movimientos sociales en las obras de Sydney Tarrow, Alain Touraine y Alberto Melucci*. Medellín, Colombia: Estudios Políticos.
- Borda, O. (2000). *Acción y espacio. Autonomías en la nueva república*. Tercer mundo. IEPRE. La cuestión agraria frente al neoliberalismo. Bogotá, Colombia: La falacia neoliberal. Crítica y alternativas.
- Castaño, J. (2008). *Las cooperativas de trabajo Asociado en el Sector Azucarero: En caso del Ingenio Mayagüez*. Universidad del Valle. Santiago de Cali.

Código Sustantivo del Trabajo. (Ley 50 de 1990). Recuperado en http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo.html

Congreso de la República. (2001). *“Por la cual se dictan normas sobre el uso de alcoholes carburantes, se crean estímulos para su producción, comercialización y consumo, y se dictan otras disposiciones”*. (Ley 693 de septiembre 19 de 2001). Recuperado en <https://www.minminas.gov.co/documents/10180//23517//21462-3660.pdf>

Congreso de la República. (2002). *“Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial; y se dictan otras disposiciones”*. (Ley 788 de 2002). Recuperado en http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0788_2002.html

Congreso de la República. (2010). *“Por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación de Empleo”*. (Ley 1429). Recuperado en http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1429_2010.html

Consejo Nacional de Política Económica y Social. (2008). *“Lineamientos de política para promover la producción sostenible de biocombustibles en Colombia”*. (CONPES 3510). Recuperado en <https://www.fenalce.org/archivos/conpesbiocombustibles.pdf>

Corte Constitucional. (2009). Sentencia T-401/09, *“Despido Colectivo”*. Recuperado en <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/t-401-09.htm>

Corte Constitucional. (2010). Sentencia T-513/10, *“Cooperativas de Trabajo Asociado”*. Recuperado en <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/t-513-10.htm>

De la Garza, T. (2000). *El papel del concepto de trabajo en la teoría social del siglo XX, en: Tratado latinoamericano de sociología del trabajo*. México: FCE.

Denuncia internacional: sector azucarero. (03 de febrero de 2016). *Sintrainagro*. Recuperado en <http://sintrainagro.org/denuncia-internacional-sector-azucarero/>

- Dunlop, J. (1978). *Sistema de relaciones industriales*. Barcelona, España: Editorial Península.
- Duque, M. (2015, diciembre, 15). “Las medidas neoliberales de Santos golpean la soberanía alimentaria del país”. *Sindicatos*. Recuperado en <http://informes.rel-uita.org/index.php/sindicatos/item/las-medidas-neoliberales-de-santos-golpean-la-soberania-alimentaria-del-pais>
- Farne, E. (2008). *Las cooperativas de trabajo asociado en Colombia: balance de la política gubernamental, 2002-2007*. Revista de economía institucional Universidad Externado. Vol. 10. Número 18. Recuperado en <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/ecoins/article/view/75>
- Gómez, M. (2014, septiembre, 13). Estados Unidos, preocupado por biotecnológicos, camiones y etanol. *El Tiempo*. Recuperado en <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14530043>
- Guadalupe, J. (2003). *Teoría de la acción colectiva, sociedad civil y los nuevos movimientos sociales en las nuevas formas de gobernabilidad en Latinoamérica*. Maracaibo, Venezuela: Espacio abierto.
- Guiarraca, N. (2002). *Movimientos sociales y protestas en los mundos rurales latinoamericanos: nuevos escenarios y nuevos enfoques*. En: revista Sociologías. Porto Alegre. No. 18. P. 246-274.
- Holt-Giménez, E., & Shattuck, A. (2009). The agrofuels transition: Restructuring places and spaces in the global food system. *Bulletin of Science, Technology & Society*, 29(3), 180-188.
- Houtart, F. (2014). *Agrocombustibles falsa solución global y destrucción local en Colombia*. Ediciones desde Abajo. Bogotá, Colombia.

- Kalmanovitz, S. (2017, julio, 23). Bioenergy: otro descalabro de Ecopetrol. *El Espectador*. Recuperado en <https://www.elspectador.com/opinion/bioenergy-otro-descalabro-de-ecopetrol-columna-704524>
- Kenneth, D y Rutledge, I. (1977). *Introduction: patters of agrarian capitalism in Latin America. En: Land and labour in Latin America*. Essays on the development of agrarian capitalism in the nineteenth and twentieth centuris. Cambridge University Press.
- Leal, T. (2018, abril, 30). Gobierno deroga decreto de tercerización laboral. *Canal 1*. Recuperado en <https://canal1.com.co/noticias/nacional/gobierno-deroga-decreto-tercerizacion-laboral/>
- Machado, A. (2003). *La cuestión agraria frente al neoliberalismo. En: La falacia neoliberal. Crítica y alternativas*. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional.
- Marulanda, A. (2012). Azúcar agridulce: trabajo y sindicatos en la agroindustria azucarera colombiana, 1960-1980. Bucaramanga, Colombia: Historia 2.0. Recuperado en <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3958409>
- McMichael, P. (2009). *The agrofuels project at large*. Critical Sociology, 35(6).
- Melo, G. (2013, diciembre, 2). El momento 'amargo' de la agroindustria azucarera del Valle del Cauca. *El País*. Recuperado en <https://m.elpais.com.co/economia/el-momento-amargo-de-la-agroindustria-azucarera-del-valle-del-cauca.html>
- Mina, M. (1975). *Esclavitud y Libertad en el Valle del Río Cauca*. Bogotá, Colombia: Fundación Rosca de investigación y acción social.
- Mina. (1975). *Esclavitud y libertad en el valle del Río Cauca*. Bogotá, Colombia: Fundación Rosca de Investigación y Acción Social. Recuperado en <https://vertov14.files.wordpress.com/2011/01/mateo-mina-libertad-y-esclavitud-en-el-valle-del-cauca.pdf>

- Ministerio de Minas y Energía. (2003). *“Por la cual se expide la regulación técnica prevista en la Ley 693 de 2001, en relación con la producción, acopio, distribución y puntos de mezcla de los alcoholes carburantes y su uso en los combustibles nacionales e importados”*. (Resolución 18 0687 de 2003). Recuperado en <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=21978>
- Mira, J. (2017, noviembre, 14). Bioetanol: política para la preservación del ambiente. *La República*. Recuperado en <https://www.larepublica.co/analisis/juan-carlos-mira-552491/bioetanol-politica-para-la-preservacion-del-ambiente-2569124>
- Mondragón, B, H. (2007). *Caña de Azúcar, Palma Aceitera. Biocombustibles y relaciones de dominación*. Bogotá, Colombia: Centro de Cooperación Indígena, Cecoin.
- Portafolio. (2018, abril, 29). *Tercerización, otra vez sin reglas claras por fallo judicial*. Recuperado en <https://www.portafolio.co/economia/empleo/tercerizacion-sin-reglas-claras-por-fallo-judicial-516660>
- Prado, M. (2017, agosto, 10). Incoherencia. *El Espectador*. Recuperado en <https://www.elespectador.com/opinion/incoherencia-columna-707393>
- Presidencia de la República. (2010). *“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1233 de 2008 y el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010”*. (Decreto 2025/10). Recuperado en <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43032>
- PROCAÑA. (2017, agosto, 28). El precio del azúcar crudo sube por impuesto sobre etanol en Brasil. Recuperado en <http://www.procana.org/new/de-interes/item/321-el-precio-del-azucar-crudo-sube-por-impuesto-sobre-etanol-en-brasil.html>
- Procuraduría General de la Nación. (2007). *Trabajo digno y decente en Colombia: seguimiento y control preventivo a las políticas públicas*. Recuperado en

[https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Trabajo%20digno%20y%20decente%20en%20Colombia_%20Seguimiento%20y%20control%20preventivo%20a%20las%20pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas\(1\).pdf](https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Trabajo%20digno%20y%20decente%20en%20Colombia_%20Seguimiento%20y%20control%20preventivo%20a%20las%20pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas(1).pdf)

RCNRadio. (2016, mayo, 6). Polémica por posible importación de etanol de EE.UU. Recuperado en <https://www.rcnradio.com/colombia/polemica-posible-importacion-etanol-ee-uu>

Recalca. (15, mayo, 2015). *Balance de los 3 años del tlc con estados unidos*. Consultado en noviembre 17 de 2017. Recuperado en www.recalca.org

Redacción Economía. (2015, octubre, 7). Millonaria multa contra los azucareros. *El Espectador*. Recuperado en <https://www.elespectador.com/noticias/economia/millonaria-multa-contra-los-azucareros-articulo-591359>

ReI-UITA. (2016). *Al presidente Santos hay que derrotarlo*. (Audio) Recuperado en <https://soundcloud.com/rel-uita/al-presidente-santos-hay-que-derrotarlo>

Sánchez, R. (2008). *Las iras del azúcar: la huelga de 1976 en el Ingenio Riopaila*. En: historia crítica no. 35, Bogotá. Enero-junio 2008. P 34-57.

Sánchez, R. (2016). *El neoextractivismo: la caldera del diablo*. En: Extractivismos y posconflicto en Colombia: retos para la paz territorial. Universidad Nacional. Bogotá. 2016. P 11-20.

SINTRAINAGRO. (2015, noviembre, 11). *Toma pacífica por la defensa en la producción azucarera y panelera en Palmira Valle*. Recuperado en <http://sintrainagro.org/toma-pacifica-por-la-defensa-del-trabajo-en-la-produccion-azucarera-y-panelera-en-palmira-valle/>

SINTRAINAGRO. (2015, octubre, 16). *Gobierno Nacional atenta contra los trabajadores del sector azucarero*. Recuperado en <http://sintrainagro.org/gobierno-nacional-atenta-contra-los-trabajadores-del-sector-azucarero/>

- SINTRAINAGRO. (2016, febrero, 3). *Denuncia Internacional- Sector azucarero*. Recuperado en <http://sintrainagro.org/denuncia-internacional-sector-azucarero/>
- Standing, G. (2013). *El precariado. Una nueva clase social*. Barcelona, España: Pasado y Presente.
- Tarrow, S. (1998). *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid, España: Alianza Editorial (segunda edición).
- Tribuna Roja. (2017). *El proletariado agrícola*. Consultado en noviembre 13 de 2017. Recuperado en <http://tribunaroja.moir.org.co/EL-PROLETARIADO-AGRICOLA-SENALA-EL.html>
- Uribe, C, H. (2014). *Expansión cañera en el valle del Cauca y resistencias comunitarias (Colombia)*. Cali, Colombia: Ambiente y sociedad.
- Urrea, F. (2007). *La rápida expansión de las cooperativas de trabajo asociado en Colombia. Principales tendencias y su papel en algunos sectores económicos*. En Controversia. Núm. 188. Recuperado en <https://www.revistacontroversia.com/index.php?journal=controversia&page=article&op=view&path%5B%5D=162>
- Vallejo, J. (2016). *Modalidades de acción, proceso organizativo y fuentes del poder social: el caso del movimiento obrero de los corteros de caña en 2008*. Universidad del Valle. Santiago de Cali.
- White, B., & Dasgupta, A. (2010). *Agrofuels capitalism: A view from political economy*. The Journal of Peasant Studies, 37(4), 593-607.